



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS:

“La naturaleza jurídica del requerimiento de elevación de actuados en sede fiscal y el derecho a la pluralidad de instancias en las Fiscalías Superiores de Lambayeque, 2017-2018.”

ASESOR:

Abogado Vargas Rodríguez Cesar

PRESENTADO POR:

Rojas Haya Karla Rossella

PARA OPTAR

EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADA

LAMBAYEQUE, 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA N° 210

Sustentación para optar el Título de Abogada de doña: **Karla Rossella Rojas Haya**.

En la ciudad de Lambayeque, en Sala de sustentaciones de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; siendo las 6:00 p.m. del día lunes 14 de octubre del 2019, se reunió el Jurado conformado por los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Abog. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**.
SECRETARIO : **DR. HUMBERTO FALLA LAMADRID**.
VOCAL : **DR. AMADOR MODOÑEDO VALLE**

Con el objeto de calificar la sustentación de la Bachiller **Karla Rossella Rojas Haya**, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo mediante la Modalidad de Presentación, Sustentación y Aprobación de Tesis.

El señor Presidente invita a la sustentante para que exponga la Tesis titulada: "**LA NATURALEZA JURÍDICA DEL REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS EN SEDE FISCAL Y EL DERECHO A LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS EN LAS FISCALÍAS SUPERIORES DE LAMBAYEQUE, 2017-2018**".

Rendido por la bachiller: **Karla Rossella Rojas Haya**, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", autorizada con Resolución N° 166-2019-UI-FDCP-UNPRG, de fecha 10 de octubre del 2019, en cumplimiento al requisito para optar el Título Profesional de ABOGADA, exigido en el Reglamento del Vicerrectorado de Investigación y de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Obteniendo el siguiente resultado: *Aprobada*.....con la nota de *16.02* y el calificativo de *Bueno*..... y apta para obtener el Título Profesional debiendo cumplir con las exigencias de las normas legales vigentes.

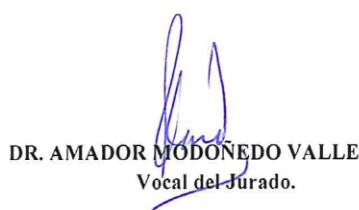
Siendo las *19:15* p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado la presente acta.

Se expide la presente a solicitud de la interesada, para los fines que estime pertinente.

Lambayeque, lunes 14 de octubre del 2019


Abog. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**
Presidente del Jurado


DR. HUMBERTO FALLA LAMADRID
Secretario del Jurado


DR. AMADOR MODOÑEDO VALLE
Vocal del Jurado.



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Karla Rossella Rojas Haya
Título del ejercicio: REVISIÓN DE TESIS
Título de la entrega: LA NATURALEZA JURÍDICA DEL R..
Nombre del archivo: AS_EN_LAS_FISCAL_AS_SUPERIO..
Tamaño del archivo: 150.75K
Total páginas: 96
Total de palabras: 16,789
Total de caracteres: 88,817
Fecha de entrega: 09-sep-2020 07:01p.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1383218096



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TÍTULO:

"LA NATURALEZA JURÍDICA DEL REQUERIMIENTO DE
ELEVACIÓN DE JUZGADOS EN MATERIA DE DERECHO A LA
PLURALIDAD DE INSTANCIAS EN LAS FISCALÍAS DE PRIMERA DE
INSTANCIA E. 2017-2018"

ASESOR:

ABOGADO CESAR VARGAS RODRIGUEZ

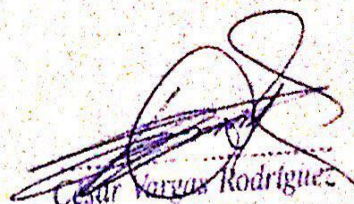
PRESENTADO POR:

KARLA ROSSSELLA ROJAS HAYA

PARA OPTAR

AL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

LAMBAYEQUE, 2019


ABOGADO
Reg. N° 1623 - ICAJ

DEDICATORIA

A DIOS, por ser el inspirador y darme fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados.

A mis padres, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ustedes he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy. En especial a mi madre, quien ha sido mi mayor motivación, este logro es más de ella que mío.

A mi padrino Miguel, por su apoyo y confianza.

A todas las personas especiales que me han acompañado a lo largo de mi vida, aportando a mi formación tanto profesional y como ser humano.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi asesor de tesis, Abogado César Vargas Rodríguez y a la Magister Diana Leonor Alas Rojas, por su apoyo y orientación en la elaboración y conclusión de la presente tesis, a mi querida Facultad De Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por formarme académica y profesionalmente en esta hermosa carrera que me apasiona.

Agradezco a todas aquellas personas que formaron parte de mi formación profesional, que me apoyaron y fueron mi inspiración, ya sea a mis docentes de la Facultad como a los diferentes jefes de mi centro de labores, gracias a ellos pude querer aún más la carrera de leyes y formarme personal como profesionalmente.

RESUMEN

El trabajo jurídico denominado: “La naturaleza jurídica del requerimiento de elevación de actuados en sede fiscal y el derecho a la pluralidad de instancias en las fiscalías superiores de Lambayeque, 2017-2018”, tiene como fin investigar en qué medida el requerimiento de elevación de actuados en sede fiscal resulta ser garantía de eficacia de la pluralidad de instancias, ya que, bajo el argumento casi generalizado de que no constituye un recurso impugnatorio, sino un mecanismo administrativo, se presentan pedidos de revisión sin estándares establecido y sin precisar el agravio que amerite una pronunciamiento de la Fiscalía Superior Penal, más aún si la propia regulación del art. 334, incs. 5 y 6 del Cód. Proc. Penal no es clara, conteniendo enunciados genéricos que no permiten identificar la naturaleza de este mecanismo o recurso, lo que da lugar a que los despachos fiscales tengan que emitir pronunciamiento por todos los aspectos de la investigación fiscal, siendo prácticamente una recalificación del caso, desnaturalizándose la finalidad para la que ha sido implementado el requerimiento de elevación de actuados.

ABSTRACT

The research study entitled: "The legal nature of the requirement of elevation of actions in tax office and the right to plurality of instances in the higher offices of Lambayeque, 2017-2018", aims to investigate the requirement of The icrease in the numbe of case fild at the tax office turns out to bein a garantice of effectiveness of the plurality of instances, since, under the almost generalized argument that it does not constitute a challenge resource, but rather an administrative mechanism, requests for revision without established standards and without specifying the tort that merits a pronouncement from the Superior Criminal Prosecutor's Office, even more if the regulation of article 334, clause 5 and 6 of the Criminal Procedure Code is not clear, containing generic statements that do not allow to identify the nature of this mechanism or resource, which gives rise to the fact that tax offices have to issue a pronouncement on all aspects of the fiscal investigation, being practically a requalification of the case, denaturing the purpose for which the requirement of elevation of actions has been implemented.

PALABRAS CLAVES:

Elevación de actuados, pluralidad de instancia, derecho al recurso, debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, derecho de doble instancia.

INDICE

DEDICATORIA.....	4
AGRADECIMIENTO	5
RESUMEN.....	6
ABSTRACT	7
INDICE	9
INTRODUCCION.....	11
CAPITULO I ASPECTOS METODOLÓGICOS	13
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	14
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.	14
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.	18
2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.....	18
3. OBJETIVOS.....	20
3.1. OBJETIVO GENERAL.....	20
4. HIPÓTESIS.	21
5. VARIABLES.	21
5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.	21
5.2. VARIABLE DEPENDIENTE.	21
6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN.	21
6.1. MÉTODOS.	21
7. TÉCNICAS.	22
8. INSTRUMENTOS.	22
CAPITULO II MARCO CONCEPTUAL.....	23
1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN.....	24
2.1. EL DERECHO DE DOBLE INSTANCIA O A LA INSTANCIA PLURAL.....	24
2.2. INSTANCIA PLURAL EN LAS SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA	26
2.3. DEFINICIÓN DEL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA.....	27
2.4. DERECHO AL RECURSO COMO UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO DE DOBLE INSTANCIA.	30
2.5 LA DOBLE INSTANCIA: VENTAJAS Y DESVENTAJAS.....	32
2.6. PRINCIPIO DE DOBLE CONFORMIDAD	33
2.8. CAUSALES PARA EL ARCHIVO PRELIMINAR FISCAL	36
2.9. IMPUGNACIÓN DEL ARCHIVO FISCAL Y EL RECURSO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS.....	37
2.10. TRATAMIENTO ACTUAL DEL REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS.....	38
2.10. APLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS EN LA ACTUALIDAD. –.....	40
CAPITULO III ANALISIS Y RESULTADOS	42
1. PRESENTACIÓN DE CASOS CONOCIDOS EN LAS FISCALÍAS PROVINCIALES PENALES EN EL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE	43

CAPITULO IV CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS	71
1. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.....	72
2. PROPUESTA DE <i>LEGE FERENDA</i>	82
CONCLUSIONES	84
RECOMENDACIÓN	86
BIBLIOGRAFÍA	87
ANEXO: PROYECTO DE LEY	92

INTRODUCCION

La práctica procesal, propia del Ministerio Público, tanto en la región Lambayeque, como en otras zonas del país, ha dejado evidenciar que las normativas reguladas en el Código Procesal Penal y que establecen los lineamientos de actuación del fiscal y los despachos corporativos en la tramitación de las investigaciones fiscales, resultan genéricas y poco precisas a diferencia de la normativa dedicada a la actividad jurisdiccional, un ejemplo claro es como, para la elevación del requerimiento de actuados; esto es la solicitud del denunciante y/o agraviado para que se revise en sede de fiscalía superior las decisiones de archivo arribadas en las fiscalías provinciales; estipulado en el art. 334, incs 5 y 6 del referido C. Adjetivo solo se ha hecho alusión al derecho que le corresponde al denunciante o agraviado de requerir la elevación de actuados y el plazo con el que cuenta tanto para elevar como resolver dicho pedido, sin embargo no establece los parámetros requisitos o formalidades para la procedencia del mismo, tal como se exige para interponer un recurso impugnatorio en la vía judicial.

En ese sentido el presente trabajo de investigación pretende dejar sentado cuál es la naturaleza jurídica del recurso de elevación de actuados, a fin de poder estimar los parámetros necesarios para su procedencia a la luz del Principio de Doble Instancia, el cual es aplicable también en este caso, logrando con ello evitar la revisión a instancia superior de casos en donde el requirente no haya

fundamentado mínimamente el agravio que le ha generado la decisión de archivo.

Asimismo, la tesis ha sido dividida en tres capítulos:

En el primer capítulo se encuentra desarrollado el ámbito metodológico, partiendo de la realidad problemática, el planteamiento del problema, los objetivos, justificación e importancia, hasta la formulación de la hipótesis.

En el segundo capítulo se ha delimitado el marco teórico, donde se describirán definiciones doctrinarias y jurisprudenciales, relevantes para la presente investigación ya que servirán para abordar en forma detallada tanto al P. de Pluralidad de Instancia como a la institución procesal penal del requerimiento de elevación de actuados.

Por último, el tercer capítulo es el más importante de todos, donde se van a aplicar todos los alcances doctrinarios de los capítulos anteriores, además del caso presentado, a fin de contrastar y validar la hipótesis propuesta, y aportar a la comunidad jurídica.

CAPITULO

I:

ASPECTOS

METODOLÓGICOS

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.

1.1. Planteamiento del problema.

En el año 2004 se promulgó el “Nuevo Código Procesal Penal” *-en adelante NCPP-*, el cual, entró en vigor en Lambayeque, cinco años después, esto es, el 01 de abril del año 2009. Este nuevo cuerpo normativo deja de lado el sistema inquisitorial imperante con el C. de PP, Ley N° 9024, *-en ad. CdPP-* donde las figuras del Juez Instructor así como de la PNP primaban dentro de la investigación y, le reconoce al Fiscal el papel de titular o director de la acción penal, con lo cual, este asume la conducción de la investigación desde su inicio de manera decisiva en pro de la sociedad (artículo IV.1 TP del NCPP); con esto, se da un cambio de paradigma, de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio con rasgos adversariales, propio de sistemas modernos y más garantistas.

Conviene hacer una breve diferencia entre el sistema inquisitivo (C de PP) y el sistema acusatorio con rasgos adversariales (CPP de 2004) en nuestro ordenamiento jurídico, *así tenemos que, en el primer sistema,* la indagación y calificación de los hechos se encontraba a cargo de un juez denominado “Juez Instructor”, teniendo el Fiscal un papel secundario dentro del proceso, conforme se puede apreciar del ar 49° del C de PP, asimismo primaba el principio de escrituralidad, teniendo un papel marginal los

principio de oralidad y contradicción; por su parte, *el segundo sistema*, es contrario al inquisitorial, puesto que aquí el Fiscal toma un papel protagónico dentro de la investigación, dado que, conforme se reconoce el art IV del TP CPP “*El Ministerio Público es el titular de la acción penal*”. Con este cambio se establecen claramente las funciones del Fiscal, quien se encarga de la investigación, mientras que los jueces, de la etapa de control y juicio oral; asimismo, se abandona el principio de escrituralidad, siendo reemplazado por el principio de oralidad, contradicción e inmediación.

Bajo ese contexto, se puede advertir de lo señalado, el NCPP ha traído varias novedades en *pro* de una mejor administración de justicia; sin embargo, también ha mantenido algunas figuras, como la que es materia de la presente investigación, esto es, **el recurso de queja o solicitud de elevación de los actuados al Superior Jerárquico**, la cual estaba regulada en el CPP en el artículo 78° que establecía que si el fiscal no requería la apertura de instrucción ante el juez, el denunciante tenía la facultad de acudir a la instancia fiscal superior a fin de que si lo considera arreglado a ley ordene al inferior a emitir la denuncia correspondiente.

Actualmente esta figura está prevista el art. 334° incs 5 y 6 NCPP, que establece la posibilidad de que el agraviado o denunciante pueda requerir al fiscal eleve las actuaciones al fiscal superior en el plazo de cinco días, cuando no esté de acuerdo con el archivo o reserva provisional de la investigación, siendo que el fiscal superior debe pronunciarse en el término

de cinco días y ordenar lo que corresponda, esto es se formalice, se confirme el archivo y otras disposiciones.

Haciendo una comparación entre la anterior y la actual regulación, se puede observar que estas presentan las mismas deficiencias, pues ambas regulaciones únicamente hacen mención, *por un lado*, a la facultad que tiene la parte denunciante o agraviada de acudir al Fiscal Superior a fin de lograr la revisión de la decisión de archivo emitida por el Fiscal Provincial y, *por otro lado*, el plazo para interponer dicha solicitud; en este último punto, existía una controversia acerca de *¿Cuál era en plazo para interponer la solicitud de elevación de los actuados tres (03) o cinco (05) días hábiles?*, esto ya ha quedado resuelto por nuestro TC en varias sentencias, donde ha señalado que el plazo de presentación esta solicitud es de cinco (05) días hábiles y no de tres (03) días como restrictivamente se interpretaba en algunos distritos fiscales.

Mención aparte merece el primer punto, esto es, **la facultad que tiene la parte denunciante o agraviada de acudir al Fiscal Superior a fin de lograr la revisión de la decisión de archivo emitida por el Fiscal Provincial**, pues sobre ello, el NCPP no establece cuál es la naturaleza de este medio *¿Si se está o no ante un recurso impugnatorio?, ¿Cuáles son los requisitos para su interposición?*; permitiendo que los recurrentes presenten escritos sin fundamentar en que se basa su desacuerdo con la decisión de archivo, buscando simplemente que el Fiscal Superior haga una revisión total de todos los actuados; lo cual, implica a su vez, que el Fiscal Superior

tenga un amplio margen de resolución; esto ocasiona serios problemas, en primer lugar, genera una sobrecarga del sistema fiscal, pues al no existir parámetros o requisitos que se exijan para la interposición de solicitud de elevación, obliga a que los Fiscales admitan a trámite todos los escritos que se presenten; en segundo lugar, conlleva a una incertidumbre para el imputado, dado que no tiene claro dentro de que márgenes va a decidir el Fiscal Superior, es decir, existe incertidumbre jurídica; y por último, en tercer lugar, toda esta situación genera la transgresión del principio de *tantum devolutum quantum appellatum*, el cual se basa en que sólo se conoce en apelación lo que se apela, esto quiere decir que, en virtud de tal principio, lo no impugnado se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial para el apelante.

Cabe precisar que respecto a la naturaleza jurídica del requerimiento de elevación de actuados en sede fiscal no existe una postura uniforme, ya que algunos consideran que es un mero acto administrativo, propio del derecho de petición de las partes, con ciertas particularidades que lo distinguen de los recursos administrativos contemplados en la ley 27444, debido a las funciones cuasijurisdiccionales del M.P. en etapa preliminar; por otro lado para otro sector de la doctrina y de la judicatura, este acto procesal vendría a ser a todas luces un recurso impugnatorio, pues lo que denunciante pide a través de este medio es que el Fiscal Superior revise íntegramente la decisión del Fiscal Provincial de disponer el archivo de los actuados.

En la práctica, es en efecto un recurso impugnatorio, tal como se pretende demostrar en la presente investigación; así pueden revisarse las disposiciones recaídas en las fiscalías superiores, en donde prácticamente, con atribuciones revisorias, al igual que un recurso de apelación en sede judicial, dichos requerimientos son declarados fundados o infundados, revocando o confirmando la decisión del fiscal provincial, todo ello en mérito al Principio de Pluralidad de Instancias que les corresponde a las partes inmersas en un proceso, sea penal o de otra índole.

1.2. Formulación del problema.

En ese sentido el problema queda formulado de la siguiente manera:

¿En qué medida el requerimiento de elevación de actuados en sede fiscal resulta ser garantía de eficacia de la pluralidad de instancias?

2. Justificación del estudio.

La investigación se encuentra justificada en diferentes aspectos que han servido de motivación para su desarrollo, los cuales se detallan a continuación:

En un enfoque social, se encuentra justificada la presente investigación, debido a que con la actual regulación de la solicitud de elevación de los

actuados en el art. 334° inciso 5 y 6 del Código Procesal Penal, al no existir parámetros se admite a trámite cualquier pedido de revisión, generando una sobrecarga innecesaria del sistema de justicia, lo cual trae dificultades en la administración, pues los Fiscales se tienen que dedicar a resolver estos pedido genéricos, en vez de utilizar sus recursos para los casos de mayor envergadura.

En un enfoque dogmático, puesto que se precisa de un detallado estudio de esta institución jurídica, ya que de la revisión de los tratados y manuales de derecho procesal penal nacionales, se advierte la carencia de un adecuado desarrollo doctrinario, lo cual trae como consecuencia el desconocimiento de su naturaleza y los alcances que tiene esta institución.

En un enfoque legislativo en este aspecto la justificación de la investigación es bastante obvia, pues la regulación del *Art. 334° inc. 5 y 6 del CPP*, resulta muy limitada, dado que no nos deja claro cuál es la naturaleza de “*la solicitud de elevación de los actuados*” y cuáles son los límites de la facultad de revisión que tiene el Fiscal Superior, al serle elevados los actuados. Ante ello, se hace necesaria una *lege ferenda* «una futura reforma de la ley» a fin de cubrir todos los vacíos existentes en la actual regulación.

3. Objetivos.

3.1. Objetivo General.

Establecer en qué medida el requerimiento de elevación de actuados en sede fiscal resulta ser garantía de eficacia de la pluralidad de instancias en las Fiscalías Superiores de Lambayeque, 2017-2018.

3.2. Objetivos Específicos.

- Definir al Principio de Pluralidad de Instancias como garantía constitucional de todas las partes inmersas en un proceso penal, estableciendo su definición, dimensiones, alcance y límites.
- Desarrollar los antecedentes, naturaleza y actual regulación de la figura denominada “*Solicitud de elevación de los actuados al Superior Jerárquico*”, regulada en el art. 334° inc. 5 CPP.
- Analizar los requerimientos de elevación de los actuados y las disposiciones emitidas por las Fiscalías Superiores de Lambayeque – sede Chiclayo emitidas respecto a ellas, en el distrito fiscal de Lambayeque durante los años 2017-2018.
- Proponer parámetros para una adecuada regulación de *la solicitud de elevación de los actuados al superior jerárquico*.

4. Hipótesis.

La hipótesis queda planteada de la siguiente forma:

El requerimiento de elevación de actuados resulta ser garantía de eficacia de la pluralidad de instancia en las Fiscalías Superiores de Lambayeque, 2017-2018, en la medida que se afirme su naturaleza jurídica de recurso impugnatorio.

5. Variables.

5.1. Variable independiente.

El requerimiento de elevación de actuados como garantía de eficacia de la pluralidad de instancia en las Fiscalías Superiores de Lambayeque, 2017-2018.

5.2. Variable dependiente.

Se debe afirmar su naturaleza jurídica de recurso impugnatorio.

6. Métodos, técnicas e instrumentos de acopio de información.

6.1. Métodos.

- **Método Inductivo:** Se han analizado los req, de elevación de los actuados contra las disposiciones de archivo preliminar, evaluados por los despachos superiores Lambayeque, y con los resultados logrados en cada caso concreto se ha a arribado a un consolidado general.
- **Método Deductivo:** Se ha realizado un estudio de la dogmática jurídica respecto al figura de la “solicitud de elevación de los actuados”, a fin de tener una definición específica de esta figura y de su naturaleza.

7. Técnicas.

- **Fichaje:** Se utilizaron fichas bibliográficas de libros y revistas especializadas, doctrina jurisprudencial y textos oficiales
- **Observación:** A través del protocolo o guía de observación de campo, siendo la investigadora la que ha obtenido la información.

8. Instrumentos.

Se realizó la técnica del análisis casuístico, en este caso se revisó como muestra las solicitudes de elevación de los actuados y las disposiciones superiores emitidas en dichos casos, bajo la muestra de 10 ejemplares.

CAPITULO

II

MARCO

CONCEPTUAL

1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

En tema materia de la presente investigación, no cuenta con antecedentes en este país, pues ni la doctrina y ni la jurisprudencia peruana, han dedicado esfuerzos al estudio de esta institución jurídica denominada “*solicitud de elevación de los actuados*”, lo que ha ocasionado que la deficiente regulación que ya existía en el C de PP, siga existiendo hasta hoy, el NCPP; siendo así, resulta relevante el estudio de esta institución, a fin de denunciar las deficiencias que presenta su actual regulación y, hacer una propuesta de *lege ferenda* «una futura reforma de la ley».

2. BASES TEÓRICAS

2.1. El Derecho de Doble Instancia o a la Instancia Plural

VARGAS ISLA considera que, tanto el Tribunal Constitucional como la doctrina especializada tienden a incluir el derecho a los recursos dentro de la Tutela Judicial Efectiva así como dentro de la pluralidad de instancias; lo que no es descabellado ya que si no estuviera regulada taxativamente la segunda, el derecho a los recursos encontraría fundamento en la tutela judicial efectiva; sin embargo, el derecho a la Tutela Judicial Efectiva es un principio mucho más amplio y lato, ya que implica muchos contenidos,

tales como el derecho de acceder a la administración de justicia, de obtener una sentencia debidamente motivada y acorde a derecho, el derecho a la defensa y el derecho a interponer medios impugnatorios, entre otros; en consecuencia y al estar taxativamente regulada la pluralidad de instancias, por una cuestión técnica y de especialidad, se debe considerar el derecho a los recursos dentro de la pluralidad de instancias, antes que parte conformante de la Tutela Judicial Efectiva¹.

Sin embargo, cabe recordar, que fue en la sentencia expedida en el caso Fujimori², que el TC reconoció que forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, el derecho a un recurso eficaz contra: a) La sentencia que lo sancione con una condena penal; b) La resolución judicial que declare fundada una medida cautelar; c) La sentencia extrapenal, que limite el contenido esencial de un derecho fundamental; y d) La resolución judicial emitida en un proceso distinto del penal, de fondo, siempre que no haya sido expedida por un tribunal colegiado y no limite el contenido esencial de algún derecho fundamental³.

¹ VARGAS ISLA, Roger Renato. La Condena del Absuelto y el Derecho del Condenado a un Recurso Amplio e Integral. Edit. Rodhas. Lima, setiembre de 2015. P. 33

² Hábeas Corpus N°4235-2010-PHC/TC.

³ VARGAS ISLA, Roger Renato. Ob cit. P. 34

Por tanto, queda claro que, para el Tribunal Constitucional, el recurso contra una sentencia condenatoria forma parte del núcleo duro del derecho instancia plural, por tanto, cualquier sentencia condenatoria es apelable sin importar la instancia o el órgano jurisdiccional que la hay expedido, siempre que no sea una sentencia confirmatoria.

2.2. Instancia Plural en las sentencias de la Corte Suprema

La C. Suprema en la Cas. N° 3461-2014-Cuzco, del 30/05/16 respecto a la instancia plural señala

“La pluralidad de instancia implica un principio de orden constitucional cuyo fin es velar que las personas naturales o jurídicas, inmersas en un proceso judicial gocen de la facultad de que los fallos del el órgano jurisdiccional sean examinados por una instancia de mayor rango de la misma naturaleza, para lo cual se debe haber utilizado los mecanismos de recurribilidad pertinentes, interpuestos dentro del plazo legal”.

En cuanto al derecho al recurso, la C.S. en la Cas N° 19861-15-Lima de fecha 30/11/2016 señala que:

“El derecho a los medios impugnatorios se erige en de las expresiones primordiales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, investido como principio-derecho de la función jurisdiccional por el art. 139 inc. o 3 de la CP del Estado, que avala que a nadie se le despoje de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. No obstante, al tratarse de un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y efectividad están sujetos a la afluencia de los presupuestos previstos por el legislador para cada ámbito del sistema jurídico – procesal”

2.3. Definición del Derecho a la Doble Instancia

Antes de entrar a tallar respecto a las concepciones doctrinarias del derecho a la instancia plural que han ido desarrollando hasta casi perfeccionar este derecho fundamental de naturaleza procesal, Arsenio Ore Guardia discrepa con la tesis sostenida por el T.C., respecto a que el principio de Doble Instancia es un subprincipio que forma parte del D.P., sino que pertenece a la T.J.E., “en tanto que, con los medios impugnatorios se busca obtener, por segunda vez, una contestación del órgano

administrador de justicia, en cuanto a la pretensión impugnatoria”⁴.

Consideramos acertada la corrección realizada por este autor, ya que justamente la doble instancia implica esencialmente la posibilidad de acceder a un medio de impugnación idóneo e integral que permita a un órgano de nivel superior revisar una decisión sobre el fondo o que ponga fin a un proceso a fin de ratificar o revocar la misma en caso observe no haya sido resuelta conforme a ley e incluso conforme a las garantías fundamentales a las que todo justiciable tiene derecho.

Para el autor peruano Guillermo Sevilla Gómez:

“El derecho a la instancia doble permite la revisión de una resolución cuestionada por el recurrente, quien a su vez es parte del proceso donde se emitió la cuestionada resolución a efectos de lograr su revocatoria, su cambio de sentido o su anulación”⁵.

De una manera más amplia Guevara Paricana señala que:

⁴ORÉ, Arsenio. Derecho Procesal Penal Peruano. Gaceta Jurídica. Lima – junio, 2016. P.338

⁵SEVILLA GALVEZ, Guillermo. Medios Impugnatorios en el Proceso Penal en la Jurisprudencia del TC. Edit. Gaceta Jurídica. Lima, febrero de 2017. P. 16.

“La instancia plural constituye garantía de la adm. de justicia, ósea, que cada nivel de la estructura del P.J. recoge el nomen iuris de instancia y en razón a ello es que las decisiones del inferior pueden ser recurridas, a fin que el superior jerárquico las examine y según sea el caso los revoque o los confirme”⁶.

Esta concepción parte de la perspectiva organizacional y funcional del órgano jurisdiccional, equiparando instancia al grado o nivel jerárquico dentro de la judicatura.

Por su parte, Luigi Ferrajoli, señala que:

“La doble instancia es el reexamen, solicitada por la parte interesada, lo que implica una garantía primordial del ciudadano y en particular, en el proceso contra el imputado”⁷.

Asimismo, el autor antes mencionado, refiere que esta doble instancia constituye a la vez una garantía de legalidad así como de responsabilidad contra la extralimitación, el abuso o el error

Del mismo modo, Bidart Campos, señala que:

⁶GUEVARA PARICANA, Julio Antonio. Principios Constitucionales del Proceso Penal. Editorial Grjley. Lima, 2007. P. 157.

⁷ FERRAJOLI, Luigi. Los valores de la doble instancia y la nomofilaquía”. Nueva Doctrina Penal. 1996. P. 446.

“...Conforme al Pacto SJ de CR, la instancia doble es vinculante en el proceso penal, ya que su art. 8.2.h., contiene el derecho de impugnar la decisión ante el juez o tribunal de mayor grado”⁸.

2.4. Derecho al Recurso como una manifestación del Derecho de Doble Instancia.

Según el TC el derecho de doble instancia tiene respecto al derecho a recurso una relación de género – especie, aunque en la práctica ambos términos sirvan para definir en igual medida a la garantía brindada por el ordenamiento jurídico – constitucional y a su vez el derecho de acudir a una instancia superior, a fin que la decisión que puso fin a un proceso en un primer nivel jerárquico sea revisada íntegramente, ello mediante la aplicación de un mecanismo idóneo de impugnación, teniendo como fundamento la falibilidad humana y la búsqueda de la justicia como fin último.

Recurriendo a la doctrina española, el derecho a al recurso, se extiende como un mecanismo orientado a maximizar las posibilidades de obtención de una sentencia justa y como garantía procesal de parte. Así pues, el cimiento último de los recursos es la falibilidad humana, el considerar que los jueces pueden aplicar

⁸ BIDART, Germán. “Manual de la Constitución Reformada”. Ed. Ediar. P. 304.

o interpretar erróneamente una norma material o procesal, y que por tanto, hace falta cuestionar tal decisión, a fin de que ésta sea modificada o anulada por un órgano jurisdiccional superior, o cuando se trata de resoluciones más simples, por el mismo juez que la emitió⁹.

En cuanto al fundamento del derecho a la doble instancia, señala Calderón Cuadrado¹⁰ que se inspira en dos ideas básicas: la jerarquía en la jurisdicción y la fiabilidad de los jueces, señalando que la segunda instancia evolucionó de la concepción jerárquica-autoritaria de la jurisdicción para convertirse en un derecho, en una garantía procesal de índole constitucional.

A efectos de la presente investigación, no se considera necesario establecer un deslinde -el cual es meramente abstracto- entre los principios antes señalados, por lo que se empleará la denominación más común y amplia, es decir, el derecho a la instancia doble , como garantía que puede verse vulnerada en caso

⁹DE LA OLIVA, Andrés y otros. Derecho Procesal Penal. 8va Edición. Edit. Universitaria. Madrid, 2007. P. 580.

¹⁰CALDERÓN CUADRADO, María Pía. La Segunda Instancia Penal. Thomson Aranzadi, Navarra, 2005. P. 41 y ss.

se apliquen literalmente los arts. 419°, inc. 2 y 425°, inc. 3, lit. b) CPP que establecen la condena del imputado absuelto.

2.5 La Doble Instancia: Ventajas y Desventajas.

Al respecto VARGAS ISLA¹¹ señala que los argumentos a favor de la doble instancia, se pueden resumir en los siguientes:

- a) La confianza del ciudadano hacia la administración de justicia, al tener claro que ante la posibilidad de error otro tribunal puede enmendar la plana.
- b) La seguridad de remediarse cualquier error judicial del órgano inferior

Asimismo, respecto a las desventajas señala:

- a) Su inutilidad. Si la que vale es la segunda sentencia, porque sus jueces son más experimentados y actúan colegiadamente, entonces, se dice que lo que se debe hacer es suprimir la primera instancia. Desde esta óptica la segunda instancia es suprimible, pues al actuar los jueces de la Segunda Instancia como de Primera Instancia, ya no es precisa la Segunda

¹¹ VARGAS, Roger. Ob. Cit P. 23-25.

Instancia. Ésta supone un gasto en tiempo, en recursos personales y económicos absolutamente innecesario e inútil.

b) Su no mayor garantía. Todos los gastos que implica una doble instancia podrían estar justificados si dicho sistema proporcionará una mayor garantía de justicia en la resolución. Sin embargo, los que se oponen a la doble instancia niegan que dicho sistema implique una mayor garantía de acierto. Es más, consideran que no es así y, argumentan que si así fuera, entonces por qué establecer sólo una segunda instancia; deberían ponerse cinco o seis instancias, para sí aumentar la garantía de acierto.

Se debe señalar que, los argumentos a favor de la instancia doble son más convincentes y firmes que los que están en su contra, los cuales niegan que en la doble instancia haya una mayor garantía de manera inconsistente. Sin embargo, el sistema de la doble instancia proporciona una mayor seguridad de certitud, enviste de confianza y sirve para impedir el exceso.

2.6. Principio de Doble Conformidad

Consiste básicamente en la aplicación concreta del Principio de Doble Instancia al proceso penal, en donde se le confiere al condenado la facultad de “enmarchar, con su iniciativa, la instancia revisoria -el mecanismo para verificar la doble

conformidad- que en caso de concordar íntegramente o en parte con el órgano de primer nivel, otorgaría una noción regular a la condena”¹².

Se critica esta posición doctrinaria en el sentido que, llevada a sus últimas consecuencias, en materia procesal penal, el derecho al recurso quedaría reducido a la facultad otorgada al imputado de impugnar toda decisión judicial que implique una condena o que tenga efectos jurídicos gravosos, siendo que en el caso de expedirse sentencias absolutorias, serían inimpugnables, inalterables, ya que no sería permitido poner en riesgo la libertad del imputado¹³.

Doble conformidad se explica como el derecho a la confirmatoria por parte del tribunal superior del fallo obtenido en la primera instancia; pues obtener en dos oportunidades el mismo resultado, se traduce en la enorme posibilidad de acierto en la solución del conflicto¹⁴.

¹²MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Fundamentos. T.I. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2003. P. 713

¹³PEÑA CABRERA FRYRE, Alonso Raúl. Los Medios de Impugnación en el nuevo CPP y los principios acusatorios y dispositivo. En Medios Impugnatorios. Problemas de Aplicación del Código Procesal Penal de 2004. Edit. Gaceta Jurídica. Lima, junio de 2011. P. 16.

¹⁴MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. 2º ed. Buenos Aires. Editores del Puerto S.R.L. 1996.

2.7. El archivo fiscal en el NCPP

El inc. 1) del art. 334° del NCPP, señala puntualmente que *"Si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado diligencias preliminares, considera que..."*, conforme se puede apreciar el proceso penal comienza con la comunicación del hecho criminal¹⁵ que llega a serle informada al Ministerio Público, en cuyo caso el Fiscal cuenta con tres posibilidades:

a) Al calificar la denuncia concluye que no existe relevancia penal, al no constituir delito de delito; que da lugar a un archivo liminar, no obstante, aun cuando, el Fiscal no puede declarar inadmisibile una denuncia, al no contar con requisitos de procedibilidad, debe ordenar la reserva provisional del caso, haciendo de conocimiento al denunciante, para que rectifique la omisión.

b) El hecho punible reviste relevancia, y decide iniciar los actos de investigación; con un plazo de 60 días hasta 120 días naturales conforme lo establece la Cas. 02-2008- La Libertad; a menos que ocurra la detención de una persona; sin embargo, el Fiscal podrá fijar un plazo fiscal distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación; por lo que al culminar este plazo legal o el fijado por el fiscal, debe decidir si

¹⁵ Es la noticia criminal, la cual como su nombre lo indica es la forma en que se enteran de que se ha cometido un hecho que riñe con la ley

formaliza y continúa con la siguiente etapa, es decir, con la investigación preparatoria; o si archiva.

2.8. Causales para el archivo preliminar fiscal.

Son las siguientes:

a) Que el hecho denunciado no constituye delito, Ello ocurre cuando: la conducta imputada no esté establecida como hecho delictivo; es decir, un hecho denunciado no es delito, cuando es atípico, sea en forma absoluta o relativa, cuando falta un elemento normativo del tipo, aquí también puede especificarse cuando ocurre una causa de antijuridicidad.

b) Que, el hecho denunciado no es justiciable penalmente; refiere el jurista *San Martín*¹⁶ que ocurre en supuestos de ausencia de una condición objetiva de punibilidad y la existencia de una causa personal de exclusión de pena o excusa absolutoria; por ejemplo: la excusa absolutoria en los delitos contra el patrimonio en los delitos de encubrimiento personal o real.

c) Que, el hecho denunciado ha incurrido en causa de extinción de la acción penal; previsto en el art. 78° CP el cual establece que la acción se extingue: “Por fallecimiento del imputado, prescripción, amnistía y derecho de gracia; por motivo de cosa

¹⁶ SAN MARTÍN, César. “Derecho Procesal Penal” Volumen I. Editorial Grijley. 1ra Reimpresión Julio 1999. p. 285.

juzgada; y, por desistimiento o transacción en casos de delitos de acción privada; también se extingue la acción penal por sentencia civil, si la sentencia ejecutoriada en la jurisdicción civil, resulta que el hecho imputado como delito es lícito; y

d) Que, el hecho denunciado carezca de indicios reveladores de la existencia de un delito; si se da una lectura restrictiva del artículo 334° del NCPP, el Fiscal luego de haber calificado la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, solo podría archivar el caso por los tres supuestos antes enumerados, pues no hay norma expresa que le faculte archivar el caso por ausencia de elementos de convicción, en todo caso lo que tendría que hacer es abrir investigación preparatoria, y si al final no logra recabar indicios reveladores de la existencia de un delito, podrá archivarlo; pero ello no es así si se aprecia con detenimiento las normas contenidas en los artículos 334° ordinal 1., 336° ordinal 1.

2.9. Impugnación del archivo fiscal y el recurso de elevación de actuados.

El Archivo Fiscal que se da en nivel preliminar carece de control judicial, y por ello está sujeto a la discrecionalidad que la norma le

otorga al Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, en este caso de calificar si la denuncia refiere o no relevancia penal

Por ello, para recurrir la disposición e archivo en sede cuasi-jurisdiccional, se ha ideado una forma de impugnación denominado *Recurso de Elevación de Actuados* formulado contra la disposición que ordena el archivo, lo que se realiza en un plazo de cinco días para que el fiscal superior evalúe dicho archivo y ordene o su confirmatoria o su revocatoria, incluso su nulidad, al confirmar, el archivo quedaría en calidad de cosa decidida, al revocar puede disponer nuevos actos de investigación o formalizar la investigación separando al primer fiscal y ordenando que sea conocida por otro.

2.10. Tratamiento actual del requerimiento de elevación de actuados.

Resulta vital que se disponga una serie de lineamientos legales o reglamentarios a fin de estimar la procedencia del Recurso de Elevación de Actuados formulada por el agraviado, denunciante o quienes se consideren legitimados para ello, puesto que en la actualidad existe un vacío legal de índole procesal para evaluar la admisión de dicho medio que en puridad es uno de impugnación,

tal como se ha determinado en los códigos adjetivos Ecuatoriano y Colombiano.

Actualmente esta problemática ha traído consigo que no se verifique un criterio o postura uniformizada para admitir los recursos de elevación de actuados, que en muchas ocasiones son declarados infundados por requisitos de procedibilidad y otras veces en forma reiterada el fiscal archiva y el superior revoca relajando la investigación preliminar y haciéndola inviable y mermando la labor persecutoria del delito por el Ministerio Público, cuestiones jurídicamente válidas que vuelven necesario emitir modelos y acciones correctoras mediante circulares, a efectos de regularlos requisitos para la interposición del *Recurso de Elevación de Actuados*, ya que a la fecha existe cierta ambigüedad respecto el recurso de Queja de Derecho que tiene su regulación propia en el NCPP para casos de denegatoria de recursos impugnatorios y de esta forma buscar celeridad en los trámites y evitar la sobrecarga procesal indebida.

Dentro de dicho esquema conceptual, se debe tomar en cuenta que para esa reglamentación se debe tener en cuenta el principio de celeridad procesal, que garantiza constitucionalmente un derecho a un proceso rápido y sin demora indebidas, englobando también los principios de economía, concentración y simplificación procesal, más aún si se estima que el archivo preliminar por parte

del MP no surte efectos de cosa juzgada, siendo tan solo una especie de absolución prematura.

2.10. Aplicación de la solicitud de elevación de actuados en la actualidad. –

El Recurso de Elevación de Actuados es formulado contra la disposición fiscal de archivo de los actuados, su plazo de interposición es de cinco días y no de tres días a fin de que sea revisado por el fiscal superior, quien emitirá pronunciamiento dentro del quinto día, en donde podrá ordenar se formalice la investigación, se archiven las actuaciones o se proceda según corresponda.

Este mecanismo es a todas luces un medio de impugnación basado en el Principio de la Instancia Doble ya que el denunciante o agraviado lo ejerce en aplicación del referido Principio Constitucional, cuando no está conforme con la resolución emitida por el Fiscal Provincial Penal, respecto a la improcedencia de la formalización de la denuncia, y aun cuando que la norma establece un plazo para resolver este recurso, no exige a la parte denunciante, presupuestos que fundamenten su recurso de elevación de actuados, o por lo menos expresen los agravios generados con la decisión y son declarados indistintamente por el superior en unos casos observando la falta de motivación para su admisibilidad como en

otros casos no, lo que permite deducir que existe un evidente abuso de este medio impugnatorio, regulado en el CPP, no obstante, los fiscales y denunciante en muchos casos invocan y aplican lo normado en el Recurso de Queja de Derecho establecido en la LOMP para supuestos que se rigen por el C de PP.

Por tanto, se aprecia que en los Distritos Judiciales, en los que se encuentra vigente el Nuevo Código Procesal Penal existe una indebida aplicación del Recurso de Elevación de Actuados, y ello debido a que la norma no exige que la parte denunciante o agraviada exprese los fundamentos del agravio, indicando los errores de hecho y de derecho así como los agravios incurridos por fiscal, lo que afecta muchas veces en casos donde los expedientes son voluminosos, pues no se expresa en los escritos que contienen el *recurso*, los errores, los defectos o vicios en que ha incidido el fiscal, ni mucho menos se consigna o se indica los fundamentos legales pertinentes.

CAPITULO

III

ANALISIS

Y

RESULTADOS

1. Presentación de casos conocidos en las Fiscalías Provinciales

Penales en el distrito fiscal de Lambayeque

Enmarcado el problema de estudio, propuestos los objetivos y formulada de la hipótesis es indispensable establecer las unidades de análisis que se van a contrastar, en este caso, se han tomado las disposiciones revisorias por las Fiscalías Superiores Penales de Apelaciones del distrito fiscal de Lambayeque, en donde se plasman tanto los argumentos de la disposición fiscal provincial de archivo, así como la parte argumentativa de los requerimientos de elevación de actuados formulados por la parte agraviada o denunciante. En ese sentido se ha procedido a analizar diez disposiciones, de una población de treinta disposiciones, las mismas que han sido seleccionadas debido a su pertinencia para la contrastación de la hipótesis que se propone como solución al problema planteado.

A continuación, se muestran en los siguientes cuadros:

1.

CARPETA FISCAL N°	2406074502-2016-200-0.
IMPUTADO	LQRR.
AGRAVIADO	Instituto Superior Tecnológico Público – Republica Federal Alemania.
DELITO	Hurto
PROCEDENCIA	2da FPPC-Ch.
HECHOS	La representante legal y Directora General del ISTP-RFA, la señora

	<p>Edita Flor Moreno Eustaquio refiere que dicha Institución adquirió 36 equipos de cómputo completos de la empresa “Mega Solutions S.A.C.” (Orden de compra N°0000134 de fecha 22/09/15 -Comprobante de pago N°0000566 de fecha 30/09/15), los cuales fueron entregados formalmente a la responsable de Abastecimiento - Almacén, la señora Carmen Rosa Portilla Tiravanti, verificándose la existencia física y correcto funcionamiento de dichos equipos mediante Informe N°42-2015-PEVM/AL de fecha 19 de octubre del 2015 emitido por el Asistente de Laboratorio Tec. Percy Edwin Vásquez Maquen. Posteriormente, la señora Carmen Rosa Portilla Tiravanti mediante Informe N°002-2016-IESTP-“RFA”ABA de fecha 07 de enero del 2016, dio a conocer el hurto de 23 monitores y 19 CPU todos en sus respectivas cajas de empaque. Al proceder a verificar lo sucedido, se percató que no existe ningún forcejeo, fractura de cerraduras, de puertas o ventanas.</p>
DISPOSICION DE ARCHIVO – FISCALÍA PROVINCIAL	<p>El despacho de la Fiscalía Provincial sustenta como argumento principal que se desprende que, no se ha podido identificar plenamente a los presuntos responsables de los hechos denunciados, precisando que si bien, la denunciante y representante legal de la agraviada, refiere que sospecha del equipo mantenimiento y limpieza conformado por Juan Carlos Gonzales Vásquez, Marco Benites Sánchez, Mario Benites Morales y Olivo Sánchez Bernilla, así como del equipo de vigilancia conformado por Walter Pasache Samillan, Oscar</p>

	Rufino Elizalde, Alberto Fiestas Córdova, Miguel Castillo Hernández y German Gastelo Hernández, sin embargo durante la investigación no se ha recabado evidencia que los vincule como autores del hecho, aunado a que según el Dictamen Pericial de Dactiloscopia Forense N° 81 al 83/2016, las huellas halladas en el lugar, no es compatible con ninguno de los vigilantes; en tal sentido, dichas sospechas no han sido corroboradas con otros elementos periféricos objetivos
REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS	El denunciante fundamenta sosteniendo que los hechos denunciados están claramente expresados en el escrito de denuncia y si bien en ella, no ha podido individualizar a los autores, le corresponde al MP y la PNP investigar los hechos y determinar los presuntos autores, en base a las circunstancias del lugar y tiempo del delito cometido, concordado con las actuaciones del personal involucrado en el hecho, como responsables de la seguridad, custodia, inventario, etc., de los bienes en el Instituto agraviado, que es una entidad del Estado.
DECISIÓN FISCAL SUPERIOR	CONFIRMAR: Bajo los mismos fundamentos del fiscal provincial.

2.

CARPETA FISCAL N°	2406034501-2016-299-0.
IMPUTADO	Héctor Aurich Barragan.
AGRAVIADO	Jorge Americo Temoche Orellano
DELITO	Coacción
PROCEDENCIA	1FPPC- Ferreñafe

<p>HECHOS</p>	<p>Se advierte que el denunciante manifiesta que viene siendo objeto de amenazas, que en la fecha de la interposición de la denuncia (24-08-16) aproximadamente a las 06:45 a.m su esposa María Celia Salazar Bautista, recoge en la Calle Ilo de la ciudad de Ferreñafe un papel bond que había sido introducido por debajo de la puerta, el cual dice: “<i>YA TE REGALAS SOLITO ESO – CACA PUM y el dibujo al parecer de una bala</i>”, sospechando de Héctor Aurich Barragan como autor del hecho al mediar ataques cibernéticos previos y en forma continua.</p> <p>El denunciante ha manifestado en su declaración de folios 12/13 que el denunciado Héctor Aurich Barragan se le acercó 20 días antes, habiéndole manifestado que no tenía ninguna participación en las amenazas que se hizo a su persona</p>
<p>DISPOSICION DE ARCHIVO – FISCALÍA PROVINCIAL</p>	<p>El despacho de la Fiscalía Provincial sustenta como argumento principal que:</p> <p>1. Inicialmente el denunciante indica que presume que el autor del hecho sea Héctor Jorge Aurich Barragan por que el mencionado a través de su cuenta de facebook lo ha atacado, pero no se ha logrado verificar que existan elementos periféricos que conlleven a crear cierto grado de certeza respecto de la comisión del ilícito penal denunciado y que posteriormente puedan ser ofrecidos como medios probatorios que sustenten una posible acusación fiscal.</p> <p>2. Que aparte de los ataques previos de que ha sido víctima el denunciante a través del facebook, no existe</p>

	<p>requerimiento alguno en la citada nota – de hacer o no hacer – no existe un resultado esperado o solicitado a través del pasquin, sólo se refiere a que el destinatario se está regalando solito, con un adjetivo en el lenguaje común: CACA, no existe pretensión de resultado alguno esperado.</p> <p>3. No se ha llegado determinar e individualizar fehacientemente a la persona responsable de haber escrito la nota en el papel bond ni a la persona que haya introducido la nota así como la bala al interior de la casa del denunciante, ni a los responsables que se encuentren involucrados en dichos actos delictivos.</p>
REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS	El denunciante fundamenta sosteniendo que existe verosimilitud con la imputación del presunto delito, que en su domicilio se encontró una nota escrita en papel bond que a la letra decía “Solo te estas regalando caca, pun” con el dibujo de una bala, después se encuentra un cartucho de bala, pero el Fiscal al archivar señala que no cuenta con elementos objetivos.
DECISIÓN FISCAL SUPERIOR	CONFIRMAR: Bajo los mismos fundamentos del fiscal provincial, especificando que la disposición de archivo se encuentra debidamente motivada

3.

CARPETA FISCAL N°	N° 2406034502-2018-608-0
IMPUTADO	LEONOR CONSUELO VILLAR GUILLERMO
AGRAVIADO	EL ESTADO

DELITO	Encubrimiento Real.
PROCEDENCIA	2 FPPC- Ferreñafe
HECHOS	<p>El denunciante sostiene que él y la denunciada han procreado a la menor de iniciales I.A.M.V., quién cuando contaba con 12 años de edad fue ultrajada sexualmente por la pareja de la denunciada Marcelino Cajusol Baldera, pero es el caso que la denunciada en un primer momento indicó que su hija I.A.M.V. Le había dicho que había sido violada por su pareja, inclusive lo denunció, pero posteriormente cambió su versión diciendo que su hija, la menor agraviada, le había manifestado que denunció a Cajusol Baldera porque la amenazaba que le iba a decir a su mamá de la relación que tenía con su primo Jairo Alexander Villar Piscoya.</p>
DISPOSICION DE ARCHIVO – FISCALÍA PROVINCIAL	<p>Si bien la denunciada ha variado su versión, sin embargo con esto no ha desaparecido huellas o pruebas del delito como lo exige el tipo penal de encubrimiento real y si bien su declaración es cuestionable, ésta será valorada en la etapa de juicio oral de la investigación y de ser el caso, será investigada y hasta sancionada por el delito de falsa declaración en juicio, pero no puede interpretarse una declaración como huella o prueba del delito, máxime si la denunciada no fue testigo directo.</p>
REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS	<p>El denunciante fundamenta sosteniendo que el Fiscal efectúa una interpretación apresurada, sin realizar ningún acto de investigación, pues ni siquiera ha tomado la declaración del denunciante y de las partes involucradas.</p> <p>El despacho ha podido verificar que la denunciada ha variado su declaración, para coincidir con lo</p>

	<p>argumentado por su defensa técnica y así evitar una pena efectiva al agresor de su hija agraviada de violación sexual. Por último el recurrente añade que si se hubiera investigado a fondo, se hubiese determinado que la denunciada actualmente vive con el agresor de su menor hija.</p> <p>.</p>
DECISIÓN FISCAL SUPERIOR – NULO CONCESORIO	<p>El Fiscal superior sustenta su decisión bajo los siguientes criterios:</p> <p>Que el requerimiento contenido en el inciso 5) del Art. 334° del NCPP, constituye, en esencia, un medio de impugnación, el cual debe estar sujeto, por tanto, a la observancia de determinados presupuestos mínimos para su admisión a trámite, como es la identificación o puesta en conocimiento por parte del recurrente del vicio o error del cual presumiblemente adolece la decisión fiscal adoptada, así como la correspondencia del perjuicio o agravio producidos con la persona del recurrente, presupuestos sin los cuales no podría afirmarse que se encuentra ante la procesalmente correcta interposición de una impugnación, siendo que al declarar su procedencia se le estaría desnaturalizando la figura jurídica en comento, degenerando por tanto la finalidad correctora que manifiesta el Nuevo Código Procesal, dado que la finalidad del requerimiento indicado es que la instancia superior, revise o reexamine la decisión de la instancia inferior identificando los errores o vicios invocados por los recurrentes para la subsanación de los mismos y el progreso adecuado de la investigación penal, como parte del proceso penal que busca tutelar jurisdiccionalmente los derechos de los agraviados con los efectos del</p>

	<p>delito, esto en concordancia supletoria del literal c) del inc. 1, del art. 405 CPP que expresamente señala que: <i>“Para la admisión del recurso se requiere: c) Que se precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación, y se expresen los fundamentos, con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. El recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta”</i>.</p> <p>En el presente caso, sin necesidad de ingresar a analizar el fondo de la controversia, de la revisión del escrito de elevación de actuados se aprecia que el recurrente sostiene de manera genérica que la decisión de archivo es apresurado ya que no se han tomados declaraciones ni se han practicado diligencias (como si se tratase de una disposición de archivo por falta de indicios); empero al haberse dispuesto el archivo por una <u>causal de atipicidad</u>, ya que los hechos denunciados no se encuadran en el tipo penal de Encubrimiento Real, <u>juicio de tipicidad que el recurrente no ha refutado</u>, pues menciona que no se han practicado actos de diligencias, <u>sin tener en cuenta que al declarar la atipicidad de los hechos, estas diligencias no tendrían ninguna utilidad, ni pertinencia</u>,</p> <p>Así como tampoco se aprecia que éste haya expresado los agravios que le ocasiona la disposición de archivo, pues el recurrente sólo hace mención en forma genérica de su pretensión, lo que definitivamente no permite a este Despacho Superior entrar a realizar un análisis exacto de lo pretendido, con los fundamentos</p>
--	---

	<p>esbozados en la disposición impugnada.</p> <p>En ese sentido la Fiscalía Superior decidió: declarar la Nulidad de la Disposición Fiscal N° Dos de fecha 09 de julio del 2018, que concede el “Recurso de Queja de Derecho”, debido a la inobservancia de los presupuestos mínimos para su admisión a trámite, como es la identificación o puesta en conocimiento por parte del recurrente del vicio o error del cual presumiblemente adolece la decisión fiscal adoptada, así como la correspondencia del agravio o perjuicio, y el contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la constitución (inciso d. Art. 150° NCPP), debiendo declararse IMPROCEDENTE el medio de impugnación (escrito de elevación de actuados) propuesto por José Carlos Vargas Espinoza, abogado del denunciante Masquez Quintana Carlos, debido a la inobservancia de los presupuestos esenciales para su procedencia señalados en la presente disposición.</p>
--	---

4.

CARPETA FISCAL N°	809-2016
IMPUTADO	JORGE PIZARRO MORI Y OTRO
AGRAVIADO	CLEMENTE FLORES VILCHEZ
DELITO	Falsedad Genérica
PROCEDENCIA	3FPPC-Ch.
HECHOS	El día 15, 16 y 24 de febrero del 2016, el denunciante en circunstancias que se encontraba encendiendo su radiograbadora, se transmitió el programa

	<p>“Confrontando” de radio “Inspiración”, que dirigen los denunciados Cesar Aurelio Rodríguez Valderrama y Jorge Pizarro Mori, circunstancias en que han emitido información que alteraba la verdad de la noticia respecto al denunciante, acerca de un Spot publicitario de su campaña al congreso del año 2011 por el partido Perú Posible que lideraba el señor Alejandro Toledo; generándole daños y perjuicios tergiversando los hechos de manera dolosa, ya que mediante Resolución N° 0004 – 2016 – JEE – Chiclayo/JNE se tiene que ha sido admitido para postular con el número 1 por el partido Peruanos Por el Cambio y no por Perú Posible.</p> <p>Refiere que la conducta ilícita está en alterar la verdad intencionalmente por cambiar la esencia o forma de algo, en este caso la de un spot publicitario de campaña electoral del año 2011 haciéndola pasar como si fuera del 2016 ya que en ellos existen términos agraviantes como: <i>“Toledo y Clemente Flores escuchen el 3, el 3, allí está amigo con Clemente se escribe el 3, el 3, el 3 Cambio de última hora la muñequita Sali se fue con el Sol y Clemente volvió con Toledo con el número 3. Clemente acaba de decir que el 40 % de lambayecanos estamos en extrema pobreza, Clemente Flores tiene 40% pero de pobreza mental.</i></p> <p>Asimismo sostiene que en otra parte refieren: <i>“Se escribe el tres amigo lambayecano, escribe el tres y marca la Chakana, el padre Michel nos manda el spot y la canción de campaña de Clemente Flores. Me están pidiendo la canción y mañana</i></p>
--	---

	<p><i>la pasa polémica de Iván Cubas. Ya sale amigo lambayecano si usted quiere apoyar la candidatura de Clemente Flores marque la chakana y escriba el número tres. N pasa nada con PPK Clemente se cambió al partido es el tres de la Chakana.</i></p> <p>Igualmente se habría dicho: <i>“A pesar de Clemente Flores Vélchez mi pata Franklin Chávez, de parte del abogado Markito Pérez Tello, Agustín Ramos y el número tres Clemente Flores renunció a PPK y ahora está postulando con el número 3 por Perú Posible amigos estaremos mañana con polémica con Iván Cubas”.</i></p>
DISPOSICION DE ARCHIVO – FISCALÍA PROVINCIAL	<p>Que no se da cuenta del delito de falsedad genérica puesto que las frases que los denunciados han vertido para referirse a la persona del denunciante, resultan ofensivas a su persona, tal como él mismo lo manifiesta en el tercer párrafo del numeral II referido a los hechos; y si es así, constituye delito contra el honor, lo cual no es competencia de este despacho Fiscal ya que los delitos contra el honor con perseguible por ejercicio privado de la acción</p>
REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS	<p>El denunciante refiere que respecto al punto dos del tipo penal denunciado en el inciso B); señor Fiscal su despacho debería realizar un análisis más profundo pues se está cumpliendo con el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, primero, que la conducta atribuida a los imputados JORGE PIZARRO MORI y CESAR AURELIO RODRIGUEZ VALDERRAMA se ajusta a</p>

	cabalidad a los contornos normativos del enunciado penal en cuestión. .
DECISIÓN FISCAL SUPERIOR –	CONFIRMAR: Bajo los mismos fundamentos del fiscal provincial, especificando que la disposición de archivo se encuentra debidamente motivada

5.

CARPETA FISCAL N°	N° 2406074501-2015-1396-0
IMPUTADO	L.Q.R.R.
AGRAVIADO	NATALY ELENY DÁVILA TAVARA
DELITO	Hurto agravado
PROCEDENCIA	1FPPC-Ch
HECHOS	Según oficio N° 2335-2015, remitido por la Comisaría PNP Cesar Llatas Castro, que adjunta el acta de constatación policial a solicitud de Nataly Eleny Dávila Távara contra L.Q.R.R., por Hurto Agravado en agravio de la Unidad Técnica Territorial Qali Warma, se tiene que la denunciante, sindicada que con fecha 31 de marzo del 2015, conjuntamente con sus compañeros de labores Elsa del Pilar Arbulú Guerra y Manuel Alberto Pedraza Hurtado, han laborado hasta las 00:40 horas, en la sede de la Unidad Técnica Territorial Qali Warma, ubicado en la calle Las Acacias N° 210, Urb. Santa Victoria, Chiclayo, habiendo puesto llave al cajón de su escritorio en la que tenía guardado la suma de S/. 2,800 soles, aprox., destinado a la ejecución de talleres, siendo el caso, que al retornar a dicha oficina a las 10.30 horas

	<p>aprox., se ha percatado que el dinero no se encontraba, pese a que ha rebuscado en toda la oficina, sin resultado positivo, lo que denuncia para los fines pertinentes.</p>
<p>DISPOSICION DE ARCHIVO – FISCALÍA PROVINCIAL</p>	<p>Analizada la carpeta fiscal, existen indicios reveladores de la presunta comisión del delito incoado, sin embargo, pese a la intervención policial, no ha sido posible la plena individualización de su presunto autor, toda vez, que del resultado de la inspección criminalística no ha sido factible obtener huellas papilares del presunto autor del latrocinio, quedando descartado de que se haya violentado la chapa del cajón del escritorio de la denunciante Dávila Távara, sino que se habría aprovechado una deficiencia de dicha chapa para lograr abrir y sustraer el dinero, extremo éste cuya preexistencia no ha sido plenamente acreditado por la denunciante Nataly Eleny Davila Távara, quien pese haberse comprometido a la brevedad a presentarlo según consta en su declaración, hasta la fecha no ha cumplido, pese a que se le requirió en forma reiterada, aunado que tampoco ha explicado porque motivo no guardó el dinero asignado en la Caja Fuerte de dicha dependencia, extremos que han imposibilitado cumplir con la exigencia establecida en</p>

	<p>el art. 201.1 CPP, que exige en los delitos patrimoniales acreditar la preexistencia del bien objeto de latrocinio, y de otro lado, el mejor esclarecimiento de los hechos, en tal sentido, debe disponerse el archivo los recaudos, dejando a salvo el derecho de reaperturar el caso, siempre y cuando se aporten nuevos elementos de convicción conforme lo prevé el artículo 335 del Código Procesal Penal, dejando a salvo, el derecho de la entidad pública de adoptar las medidas correctivas contra la denunciante Davila Tavera por su conducta negligente de guardar dinero proveniente de fondos públicos, sin utilizar la caja fuerte asignada por su dependencia.</p>
REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS	<p>El denunciante fundamenta sosteniendo que hay suficiencia de elementos periféricos que contra los que resulten responsables en los hechos investigados. Máxime si se tiene en cuenta que el dinero sustraído estaba destinado a la ejecución de talleres del Programa Qali Warma de dicha jurisdicción, por lo que se deberán ampliar las investigaciones a fin de poder identificar plenamente a los responsables.</p>
DECISIÓN FISCAL SUPERIOR	<p>CONFIRMAR: La decisión de archivo</p>

6.

CARPETA FISCAL N°	2406074501-2018-695-0
IMPUTADO	LIDIA MARIELA SAMAME CARRILLO
AGRAVIADO	HILTON ROMERO CRESPO NICOLA
DELITO	Usurpación
PROCEDENCIA	1FPPC-Ch
HECHOS	<p>a) El denunciante Hilton Romero Crespo Nicola refiere que la denunciada Lidia Mariela Samamé Carrillo, fue conviviente de su hijo Harry Hilton Crespo Amaya, a quienes hace años les prestó una parte de su inmueble en Las Américas Progresivas – Chiclayo, para que vivan en compañía de sus nietos; al cabo de un tiempo su hijo se retiró de la casa, permaneciendo la investigada en el mencionado inmueble.</p> <p>b) Refiere también el denunciante que le viene solicitando a la investigada desde hace meses que se cambie de ambiente, porque tenía pensado realizar algunas modificaciones en la casa; pero ante la negativa tácita de la denunciada el día <u>23 de enero del 2018</u>, aproximadamente a las 21:00 horas, le volvió a solicitar que se cambie de ambiente, circunstancias en las que la denunciada lo agrade verbalmente, llegando un grupo de personas conformado por Natalia Araujo Amasifuen, Edilfredo Guerrero Pérez, Gladys Ascorbe Guevara, Noemí Gonza Jiménez, Esther Céspedes de la Cruz, Gabi Nuñez, Ángel Bernal Céspedes y los esposos</p>

	<p>Maribel Esmeralda Vega Quispe y Víctor Santoyo, que ingresaron al inmueble tratando de agredirlo.</p> <p>c) Agrega el denunciante que la denunciada ha comenzado a levantar paredes dentro del inmueble, tratando de apropiarse de una parte de su casa en un área aproximada de 16 m², 4 metros de ancho por 4 metros de fondo con frente a la calle; y esto le está ocasionando daños y perjuicios.</p>
DISPOSICION DE ARCHIVO – FISCALÍA PROVINCIAL	<p>El despacho de la Fiscalía Provincial sustenta como argumento principal que:</p> <p>Que no concurren los presupuestos para estimar la comisión del delito de usurpación en el hecho denunciado, toda vez que el propio denunciante refiere que lo que propuso a la denunciada fue un cambio de ocupación dentro del inmueble en el cual ella vivía, no que esta se retirara del mismo; y aun cuando se estimara que la solicitud del denunciante fue para que ella se retirara y ésta pese a ello se mantuviera en el lugar, tampoco justifica una imputación por el delito de usurpación, toda vez que la negativa de la denunciada a retirarse de un lugar que ocupa por propia voluntad del denunciante a lo sumo da lugar a que éste opte por iniciar una acción civil a fin de lograr el desalojo de la denunciada pues la ocupación de ésta habría devenido en precaria.</p> <p>Que no se señala en la denuncia que el denunciante haya retirado del inmueble a la denunciada y que ésta retornó para ocupar nuevamente parte del inmueble -mediando violencia o</p>

	<p>amenaza-, y si bien, el denunciante refiere que al solicitarle el cambio de ubicación a la denunciada hicieron su aparición un grupo de personas identificadas como Natalia Araujo Amasifuen, Edilfredo Guerrero Pérez, Gladys Ascorbe Guevara, Noemí Gonza Jiménez, Esther Céspedes de la Cruz, Gabi Nuñez, Ángel Bernal Céspedes y los esposos Maribel Esmeralda Vega Quispe y Víctor Santoyo quienes habrían ingresado al inmueble con la intención de agredirlo, ello no aparece en la denuncia verbal que formuló en la Comisaría PNP César Llatas Castro el mismo día 23 de enero de 2018, donde narra en esencia los mismos hechos que han dado origen a la presente carpeta fiscal, sin embargo no aparece la referencia a las personas antes mencionadas ni siquiera de manera indirecta, circunstancia que pone en cuestión la sindicación formulada y no permite atribuir responsabilidad alguna a dichas personas.</p>
<p>REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS</p>	<p>El denunciante fundamenta sosteniendo que con un mejor criterio de justicia se ameriten los medios aportados de los hechos agravantes a su salud, pues no se ha tomado en consideración su edad (86 años cumplidos) pretendiendo despojarlo de manera ilegal de su vivienda.</p> <p>Que se le otorgue las garantías que salvaguarden la integridad física del recurrente y de su esposa Doris Liliam Amaya de Crespo y su hijo Harrison Elías Crespo Amaya, por encontrarse en continuo riesgo sus</p>

	<p>vidas, por parte de los denunciados que también violentaron su domicilio cuyos nombres completos y direcciones fueron consignadas en la denuncia interpuesta.</p>
DECISIÓN FISCAL SUPERIOR	<p>La Fiscalía Superior decidió declarar nulo el concesorio, basándose en que:</p> <p>al revisar los agravios que han sido expuestos por el recurrente, se aprecia que resultan ser genéricos y vagos, en tanto que sólo manifiesta que “no hay análisis de los elementos de convicción, así como tampoco se ha tomado en consideración su edad (86 años cumplidos) pretendiendo despojarlo de manera ilegal de su vivienda”, sin identificar que medio probatorio no ha sido valorado en la presente investigación y que haya sido trascendente para acreditar el hecho que denuncia, pues el recurrente sólo hace mención en forma genérica de su pretensión, lo que definitivamente no permite a este Despacho Superior entrar a realizar un análisis exacto de lo pretendido, pues su justificación no es precisa, sino genérica. Más aún si conforme se aprecia en la presente carpeta fiscal, los medios adjuntados a la denuncia son una copia de denuncia por violencia familiar, una fotografía de una pared de adobe y 2 contratos de compraventa a favor de Doris Liliam Amaya de Crespo; advirtiéndose que tales documentos no constituyen elemento objetivo alguno que acredite la supuesta usurpación alegada por el denunciante.</p>

	<p>Por tanto, conforme a los fundamentos precedentes, este Despacho Superior insiste en que no hay expresión de agravios y fundamentos, por ello al no haber descrito oposición alguna a la disposición impugnada en cuanto a los argumentos que motivan el archivo de la presente investigación, los mismos que no han sido evaluados por el fiscal a cargo de la investigación, para declarar la improcedencia del medio de impugnación propuesto, se debe declarar la Nulidad de la Disposición Fiscal que concede el “Recurso de Queja de Derecho”, debido a la inobservancia de los presupuestos mínimos para su admisión a trámite, como es la identificación o puesta en conocimiento por parte del recurrente del vicio o error del cual presumiblemente adolece la decisión fiscal adoptada, así como la correspondencia del agravio o perjuicio, (inciso d. Art. 150° NCPP), debiendo declararse IMPROCEDENTE el medio de impugnación propuesto por Hilton Homero Crespo Nicola, debido a la inobservancia de los presupuestos esenciales para su procedencia señalados en la presente disposición.</p>
--	---

7.

CARPETA FISCAL N°	N° 2406074502-2017-5539-0
IMPUTADO	JOSÉ MARLON FALEN CASTAÑEDA
AGRAVIADO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
DELITO	Des. Y Res. Aut.
PROCEDENCIA	2FPPC-Ch
HECHOS	Según fluye de la denuncia, el día 10

	<p>de junio de 2017, el personal de la Sub Ger. de Fis. de la MPCH se constituyó al establecimiento comercial denominado “Chifa Snack Jet Li” de propiedad de José Marlon Falen Castañeda, ubicado en la calle Lora y Lora N° 330 y al requerir la documentación correspondiente advirtieron que dicho local no tenía lic. de func., por lo que procedieron a imponer una papeleta de infracción y levantaron el Acta de Clausura Temporal; sin embargo pese a la clausura, el denunciado José Marlon Falen Castañeda hizo caso omiso a dicha orden, ya que con fecha 11 de junio de 2017 el personal de fiscalización encontró otra vez en funcionamiento al referido local.</p>
<p>DISPOSICION DE ARCHIVO – FISCALÍA PROVINCIAL</p>	<p>El despacho de la Fiscalía Provincial sustenta como argumento principal que:</p> <p>1.- Para la configuración del delito, debe exigirse que la orden de la autoridad sea emitida con expreso apercibimiento de denunciarse al destinatario de la misma por este hecho delictivo en caso de incumplimiento.</p> <p>2.- Siendo así, la Municipalidad Provincial de Chiclayo no agotó la vía adm., solo se ha limitado a imponer un papeleta de infracción y una orden de clausura, sin agotar con todos los mecanismos que la ley prevé, pues no ha iniciado el procedimiento sancionador correspondiente, operando el principio de mínima intervención y subsidiaridad.</p>
<p>REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS</p>	<p>El denunciante fundamenta sosteniendo que lo dispuesto por el Fiscal no se adecua a lo ocurrido</p>

	realmente, toda vez que no ha tomado en cuenta el bien jurídico protegido que es la tranquilidad pública, no se ha investigado plenamente la realidad de los hechos, siendo dicho comportamiento contrario a ley; asimismo sostiene que, la conducta cometida por el denunciado encaja en el delito establecido en el artículo 368° del Código Penal, toda vez que, para que se consuma dicha acción típica basta el incumplimiento de la orden u omitir su realización.
DECISIÓN FISCAL SUPERIOR	CONFIRMAR: la disposición de archivo, la cual se encuentra debidamente motivada.

8.

CARPETA FISCAL N°	2406074501-2016-5516-0.
IMPUTADO	Williams Francisco Minchan Mori.
AGRAVIADO	Jhimy Jhoan Panduro Ushiñahua
DELITO	Estafa
PROCEDENCIA	1FPPC-Ch.
HECHOS	De la denuncia se tiene que el denunciante Jhimy Jhoan Panduro Ushiñahua, manifiesta haber conocido al denunciado Williams Francisco Minchan Mori, porque éste tenía amistad con su difunta madre, de lo que se aprovechó para realizar la venta del inmueble ubicado en el Pasaje Miler Mz K Lote 04- Pueblo Joven Medio Mundo del distrito de José Leonardo Ortiz, que le pertenecía a su difunta madre y asimismo señala el denunciante que el denunciado constantemente se comunicaba con él a fin de que vendiera el inmueble antes referido e incluso tenía destinada a la persona

	<p>de Gabriel Carranza Carrasco como comprador y ante tal insistencia, el recurrente viajó de Lima a la ciudad de Chiclayo, llegando a vender la casa por S/25,000.00 (veinticinco mil soles), encontrándose el denunciado presente en dicha transacción; y al ver que había recibido dinero por dicha venta realizada insistió a fin de que le diera S/19,000.00 (diecinueve mil soles), para realizar unos pagos y la compra de equipos de sonido de lo cual le daría participación al denunciante de las ganancias obtenidas, sin el perjuicio de hacerle la devolución de la cantidad de dinero que le sacó entre engaños.</p> <p>Que la devolución del dinero se iba a realizar en un mes pero pese a que ha pasado el tiempo, el denunciado no le ha otorgado utilidades, ni mucho menos le ha devuelto el dinero, habiéndolo llamado por celular como también se ha constituido de manera personal a su domicilio y se ha hecho negar, tal es así que ha cursado una Carta Notarial con fecha 19 de setiembre del 2016, por la cual tiene pleno conocimiento del daño causado, aprovechándose del momento difícil que pasaba.</p>
DISPOSICION DE ARCHIVO – FISCALÍA PROVINCIAL	<p>El despacho de la Fiscalía Provincial sustenta como argumento principal que:</p> <p>1.- No se evidencia la configuración del delito denunciado, pues, no se aprecia que se halla inducido a error o engaño de forma invencible a Jhimy Jhoan Panduro Ushiñahua a que realice la venta de su bien inmueble por veinticinco mil soles con la finalidad de que el denunciado</p>

	<p>Williams Francisco Minchan Mori se aproveche de ese dinero recibido por la venta del inmueble de autos; por el contrario, el denunciado ha pedido prestada la suma de 19,000.00 soles con la finalidad de realizar unos pagos y una compra de equipos de sonido de los cuales el denunciante iba a ser partícipe de las ganancias, en ese sentido, no se puede hablar de un efectivo engaño ni inducción a error, por cuanto el denunciado no ha empleado engaño suficiente a fin de que el denunciante Jhimy Jhoan Panduro Ushiñahua realice la venta del bien inmueble.</p> <p>2.- Debió tener la diligencia debida para requerir el valor del bien inmueble, el mismo que finalmente fue pagado al denunciante; siendo el desprendimiento patrimonial de manera posterior a dicha transacción, evidenciándose una contraprestación de ámbito civil.</p>
REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS	<p>Que el denunciado tenía destinado al señor Gabriel Carranza Carrasco como comprador del bien que le pertenecía a su madre, induciéndolo a error al decirle que aprovechara en venderlo, sin percatarse el denunciante que sus verdaderas intenciones eran a través de la enajenación del inmueble, obtener un provecho económico, pues en todo momento estuvo interesado en la venta y cuando se concretó la misma, de manera dolosa le pidió que le prestara el dinero para que invirtiera en unos instrumentos de música y que las ganancias serían compartidas, y que desde esa fecha hasta la interposición del recurso de elevación de actuados no ha recibido ninguna ventaja por dicho préstamo,</p>

	<p>ni le ha devuelto el mismo, pese a sus constantes insistencias de que le retribuya su dinero, mostrando su total desinterés.</p>
DECISIÓN FISCAL SUPERIOR	<p>CONFIRMAR: la disposición de archivo, argumentando que en los hechos investigados no concurre el primer elemento típico que se exige para la configuración del delito de estafa, esto es <u>que no se ha establecido la concurrencia del engaño precedente o concurrente, ni engaño bastante, astucia o ardid</u> – concurriendo así un supuesto de atipicidad relativa, resultando innecesario el análisis de los demás elementos, toda vez que los presupuestos objetivos o elementos del delito de Estafa.</p> <p>Aunado a ello se puede sostener que en realidad el conflicto nace del incumplimiento de un contrato civil, entendido este como el acuerdo de dos, perfeccionado por que se ha establecido que ha existido manifestación de voluntad o consentimiento entre ambos; el cual conforme a lo sostenido por el denunciante Jhimy Jhoan Panduro Ushiñahua se asemejaría a un Contrato Civil de Préstamo o Mutuo que regula el artículo 1648° y siguientes del Código Civil para cuya existencia válida no es exigible formalidad escrita u otra formalidad <i>ad solemnitatem</i>, por ende se puede afirmar que en realidad los hechos que sostiene el denunciante se asemeja a un contrato civil verbal, el cual ha surtido como efectos la obligación de devolver una suma de dinero; por lo que su incumplimiento</p>

	también corresponde dilucidarse en la vía extrapenal respectiva y no en esta vía.
--	---

9.

CARPETA FISCAL N°	2406074502-2018-3040-0.
IMPUTADO	Reina Isabel Huamán Guzmán
AGRAVIADO	Aura Antonieta Bernilla de Gonzáles
DELITO	Coacción
PROCEDENCIA	2FPPC-Ch
HECHOS	La denunciante refiere que el día 03 de mayo del 2018, a las 11:30 horas aproximadamente, se presentó en su domicilio la señora a quien conoce como “Reina”, la misma que vía telefónica se ha identificado como Reina Isabel Huamán Guzmán, sosteniendo que le adeuda dinero, pese a que ya ha cumplido con cancelarle, amenazándola con que va a ingresar a su domicilio a destrozarle sus pertenencias y que su sobrino, quien es delincuente, le va a hacer daño en caso de que no le cancele la suma de S/ 2,800.00. Agrega que todo ello lo hace porque vive sola y sufre de presión alta, viéndose perjudicada en su salud, lo cual no le permite vivir con tranquilidad teniendo en consideración su edad avanzada.
DISPOSICION DE ARCHIVO – FISCALÍA PROVINCIAL	El despacho de la Fiscalía Provincial sustenta como argumento principal que: No se aprecia la existencia del delito denunciado, como consecuencia de una amenaza;

	<p>situación que no se puede considerar en el presente caso, pues la llamada que recibió la denunciante por parte de la denunciada, no resulta ser suficiente para doblegar la voluntad del sujeto pasivo; siendo ello así se advierte entonces que no existe un conocimiento seguro y claro de la materialización de la violencia ejercida contra la denunciante menos de amenaza alguna que signifique la existencia de inminencia de algún supuesto atentado que se efectuaría contra la integridad de la denunciante; por lo que al no reunir suficientes elementos de convicción sobre el delito denunciado procede al archivo de la denuncia.</p>
REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS	<p>El ilícito penal está acreditado ya que no es solo ella la agraviada sino su hijo también. Además la denunciada la está calumniando pues no le debe dinero alguno, inclusive los intereses que cobra están prohibidos por ley.</p>
DECISIÓN FISCAL SUPERIOR	<p>CONFIRMAR: Bajo los mismos fundamentos del fiscal provincial</p>

10.

CARPETA FISCAL N°	N° 2406074502-2015-4680-0
IMPUTADO	Caja Sipan S.A.
AGRAVIADO	Miguel Angel Inga Herrera
DELITO	Estafa.
PROCEDENCIA	2FPPC-Ch
HECHOS	Refiere el denunciante MIGUEL ANGEL INGA HERRERA, que con

	<p>fecha 24 de enero del 2015, adquirió mediante compra venta el terreno agrícola denominado El Triunfo Sector El Huingo, Cajaruro, e Utcubamba, Amazonas, el cual le fue vendido por los representantes de la Cj Sipán S.A., WALTER TELESFORO CASTAÑEDA LEYVA y RUTH ROSARIO CHAVEZ YAMUNAQUE, por el precio de S/.105,000.00; sin embargo ha sido víctima de engaño, astucia y ardid, por cuanto le vendieron un predio supuestamente desocupado, haciendo aparecer en el documento que le estaban entregando el mismo; sin embargo, cuando ha ingresado a tomar posesión, encontró a los dueños. Que, para realizar esta compra, solicitó a la referida entidad financiera un crédito de S/.55,000.00 y le han hecho llegar un aviso de pago, debido a que no ha podido trabajar el terreno para cumplir con el pago de dicho préstamo. Que, ante los requerimientos notariales que ha remitido a la entidad, le han ofrecido darle un terreno en San Ignacio, el cual no es apto para la agricultura y no tiene agua, por lo que el denunciante se ha negado a recibirlo; motivo por el cual está solicitando la devolución del importe pagado, ascendente a S/.105,000.00.</p>
DISPOSICION DE ARCHIVO – FISCALÍA PROVINCIAL	<p>El despacho de la Fiscalía Provincial sustenta como argumento principal que los hechos consistirían en una contraprestación de ámbito civil; al no haber mediado diligencia debida en la actuación de los denunciantes</p>
REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS	<p>Que, los denunciados representantes de la C. Sipan S.A., con fecha 24 de</p>

	<p>enero del 2015, transfirieron la propiedad de un predio agrícola denominado El Triunfo, ubicado en el Sector El Huingo Cajruro Utcubamba, Región de Amazonas, por el monto de S/. 105,000.00 soles, para lo cual los vendedores le dijeron que podían darle un préstamo, por cuanto solo contaba en su poder con la suma de S/. 50,000.00 soles por lo que a tanta insistencia aceptó y le dieron el préstamo de S/. 55,000.00 soles reuniendo así los S/. 105,000.00 soles, firmando los documentos respectivos en base a la confianza ya que se trataba de una entidad crediticia conocida.</p> <p>Siendo el caso, que los denunciados bajo ningún motivo y circunstancia le informaron que el terreno que se vendía estaba en proceso judicial, por lo que su persona desconocía tal hecho, puesto que si le hubiera puesto en conocimiento jamás lo hubiera comprado para evitar problemas, por lo que la actuación de los denunciados desde su inicio fue a todas luce dolosa, dañina, prejuiciosa, aprovechándose de su condición de campesino, empleando astucia, ardid y otra forma fraudulenta, toda vez que existe un proceso judicial en trámite.</p>
DECISIÓN FISCAL SUPERIOR	<p>CONFIRMAR: Bajo los mismos fundamentos del fiscal provincial, especificando que la disposición de archivo se encuentra debidamente motivada.</p>

CAPITULO

IV

CONTRASTACION

DE LA

HIPOTESIS

1. Análisis de resultados y contrastación de la hipótesis

Apreciando los cuadros previamente presentados, donde obran datos sobre los casos conocidos en las Fiscalías de Lambayeque, relativo a los requerimientos de elevación de actuados a las Fiscalías Superiores Penales de Apelaciones para que en vía de revisión decida declarar fundado el requerimiento y revocar la decisión de archivo, declarar infundado y confirmar la disp. de archivamiento o en todo caso declarar la nulidad de la disp. de archivamiento o de la disposición concesoria, podemos concluir lo siguiente:

- En el primer caso, contenido en la Carpeta Fiscal N° 200-2016, sobre denuncia por Hurto, se verifica que el principal motivo por el cual se procede a no formalizar la investigación preparatoria es debido al fracaso de la estrategia de investigación, ya que al no haberse podido identificar a los responsables o autores del delito de Hurto en agravio ISTP– Rep. Fed. Alemana, deviene en una investigación inviable.

En ese sentido el recurrente indicó como argumento para formular requerimiento de elevación de actuados que si bien no ha podido individualizarse a los autores, le corresponde al MP y a la PNP investigar los hechos y determinar los presuntos autores, en base a las circunstancias del lugar y tiempo del delito cometido, concordado con las actuaciones del personal involucrado en el hecho, como responsables de la seguridad, custodia, inventario, etc., de los bienes en el Instituto

agraviado, que es una entidad del Estado, no obstante, es un argumento en donde no se aprecia claramente el agravio causado, indicando cual habría sido el error o afectación del Debido Proceso y un error *in iudicando*, al haberse inaplicado o interpretado erróneamente dicha norma al caso concreto, sin embargo, pese a dichas omisiones advertidas, el despacho provincial, como en la mayoría de veces eleva los actuados al superior, emitiendo disposición de concesorio de elevación, sin hacer mayor análisis respecto a la procedibilidad del mismo, circunstancia que ocurre por la imprecisión de la norma que contiene la figura procesal del requerimiento de elevación o actuados, llamado habitualmente recurso de queja y porque no es considerado un recurso impugnatorio que garantice la pluralidad de instancia.

-En el segundo caso contenido en la Carpeta Fiscal N° 299-2016, sobre denuncia por Coacción, siendo dos los argumentos del fiscal para proceder al archivo, siendo el primero que no se advierte la utilización de amenaza y que por otro lado no logró identificarse al autor de la nota de Facebook a la que se hace alusión en los hechos denunciados.

En ese sentido, se tiene que el recurrente presentando escrito de elevación de actuados señalando que *“que existe verosimilitud con la imputación del presunto delito, que en su domicilio se encontró una nota escrita en papel bond que a la letra decía “Solo te estas regalando caca, pun” con el dibujo de una bala, después se encuentra un cartucho de*

bala, pero el Fiscal al archivar señala que no cuenta con elementos objetivos”; sin embargo, no se aprecia motivación alguna en dicho escrito, menos la indicación de agravio alguno o por lo menos pronunciarse y cuestionar los dos fundamentos principales esgrimidos por el Fiscal Provincial a cargo del caso.

No obstante, al no existir un filtro para la procedencia de los requerimientos de elevación de actuados, indiscriminadamente todos los escritos, aun cuando carezcan de fundamentación son elevados a la Fiscalía Superior, la que muchas veces, ni siquiera toma en cuenta el contenido del requerimiento, problema que se resolvería de adicionarse un texto normativo que establezca el contenido, alcance y procedencia de un requerimiento de elevación de actuados, y se le otorgue una naturaleza de recurso impugnatorio.

-En el tercer caso, contenido en la Careta Fiscal 608-2018, sobre denuncia por encubrimiento real, podemos verificar que la causal de archivo es falta de tipicidad, siendo que el recurrente al formular su requerimiento de elevación de actuados, señala que el Fiscal efectúa una interpretación apresurada, sin realizar ningún acto de investigación, pues ni siquiera ha tomado la declaración del denunciante y de las partes vinculadas.

Es resaltante en este caso la decisión de la Fiscalía Superior Penal de

Apelaciones a la que se eleva el requerimiento de la parte recurrente, ya que decidió declarar nula la disposición que concede el referido requerimiento, argumentando entre otros argumentos lo siguiente:

“Que el requerimiento contenido en el inciso 5) del Art. 334° del NCPP, constituye, en esencia, un medio de impugnación, el cual debe estar sujeto, por tanto, a la observancia de determinados presupuestos mínimos para su admisión a trámite, como es la identificación o puesta en conocimiento por parte del recurrente del vicio o error del cual presumiblemente adolece la decisión fiscal adoptada, así como la correspondencia del perjuicio o agravio producidos con la persona del recurrente, presupuestos sin los cuales no podría afirmarse que nos encontramos ante la procesalmente correcta interposición de una impugnación”

En ese sentido, la Fiscalía Superior se decanta por considerar como un recurso de impugnación al requerimiento de elevación de actuados, tal como se propone en la presente tesis, lo que implica que para su procedibilidad deben existir determinados lineamientos, como en el caso de un rec. de apel. en sede judicial, es decir, básicamente que se señale el agravio, así como el error procesal o sustantivo en que el que el fiscal provincial podría haber incurrido al momento de aplicar la norma procesal o material en la situación concreta.

Otro de los argumentos de la Fiscalía Superior Penal es el siguiente:

“Al declarar su procedencia (del requerimiento de elevación de actuados materia de análisis) se le estaría desnaturalizando la figura jurídica en comento, degenerando por tanto la finalidad correctora que manifiesta el Nuevo Código Procesal, la misma que encuentra concordancia con los llamados Derechos a la TJE, Debido Proceso y Pluralidad de Instancias”.

Dentro de los argumentos de la Fiscalía Superior Penal, para motivar justificadamente su decisión de declarar nulo el concesorio de elevación, ha fundamentado también el sustento constitucional, el cual radica en los principios y garantías fundamentales como la tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso y sobre todo pluralidad de instancias, que como hemos señalado, forma parte del DP y tiene como objeto revisar, por parte de un superior los vicios en los que puede haber incurrido el órgano de primera instancia, a fin de reformar la decisión, de ser atendible dicho derecho.

Otro de los argumentos de la Fiscalía Superior es:

“La finalidad del requerimiento indicado es que la instancia superior, revise o reexamine la decisión de la instancia inferior identificando los errores o vicios invocados por los recurrentes para la subsanación de los

mismos y el progreso adecuado de la investigación penal, como parte del proceso penal que busca tutelar jurisdiccionalmente los derechos de los agraviados con los efectos del delito,

La Fiscalía Superior, a falta de normativa expresa, bajo una intrp.. sistemática y supletoria del art. 405 CPP, relativo a las formalidades de todo recurso impugnativo en general, al considerar al requerimiento de elevación de actuados como un recurso, considera que este debe reunir también los presupuestos o formalidades para la procedencia del REA, sobre todo lo relativo a que se especifiquen las partes de la decisión del fiscal provincial que le genere el agravio y los argumentos que rebaten los motivos esgrimidos por el fiscal.

Ahora bien, respecto al caso en concreto se tiene lo siguiente:

*“Que el recurrente sostiene de manera genérica que la decisión de archivo es apresurado ya que no se han tomados declaraciones ni se han practicado diligencias (como si se tratase de una disposición de archivo por falta de indicios); empero al haberse dispuesto el archivo por una **causal de atipicidad**, ya que los hechos denunciados no se encuadran en el tipo penal de Encubrimiento Real, **juicio de tipicidad que el recurrente no ha refutado**, pues menciona que no se han practicado actos de diligencias, **sin tener en cuenta que al declarar la atipicidad de los hechos, estas diligencias no tendrían ninguna utilidad, ni pertinencia,**”*

La fiscalía superior advierte que el recurrente en modo alguno rebate el argumento principal de la disposición impugnada, esto es, la atipicidad de los hechos denunciados, sino que apela a otras circunstancias impertinentes para los efectos del caso, circunstancia que podría percibirse como una motivación aparente, ya que en nada se pronuncia sobre los aspectos sustanciales que han motivado la decisión de archivo.

Por último, la disposición revisoria refiere lo siguiente:

“Así como tampoco se aprecia que éste haya expresado los agravios que le ocasiona la disposición de archivo, pues el recurrente sólo hace mención en forma genérica de su pretensión, lo que definitivamente no permite a este Despacho Superior entrar a realizar un análisis exacto de lo pretendido, con los fundamentos esbozados en la disposición impugnada”.

Indica la no fundamentación de los agravios, tal como se exige para todo recurso de impugnación. Así consideramos acertada y debidamente fundamentada la decisión de la Fiscalía Superior de no admitir un recurso de elevación de actuados que no ha fundamentado los agravios ni cumplido presupuestos de procedibilidad.

-En el cuarto caso, contenido en la Carpeta Fiscal N° 89-2016, al haberse denunciado la comisión del delito de Falsedad Genérica, la Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo decide no formalizar la investigación, debido básicamente a la existencia de una causal de atipicidad absoluta, por su parte el recurrente plantea su requerimiento para que los actuados sean elevados al superior basándose en que se debe realizar un análisis más profundo pues se está cumpliendo con el principio de legalidad, que se verifican todos los elementos exigidos en la ley penal para la configuración del delito, y que la conducta de los imputados se ajusta a cabalidad a los contornos normativos del enunciado penal en cuestión.

La Fiscalía Superior Penal confirma Bajo los mismos fundamentos del fiscal provincial, especificando que la disposición de archivo se encuentra debidamente motivada

Claramente se aprecia la falta de motivación del escrito presentado por el recurrente, si bien señala que se cumplen los elementos normativos exigidos por el delito de Falsedad Genérica, no realiza el debido juicio de subsunción que a su criterio considera es el adecuado, a fin de al menos plasmar la proposición jurídica que pretende plantear ante el superior para que se tome en cuenta su requerimiento; en ese sentido dicho recurso debió ser declarado improcedente por el fiscal provincial a cargo del caso, al no reunir los mínimos presupuesto de motivación.

-En el quinto caso, signado en la Carpeta Fiscal N° 1396-2015, en donde se denunció el delito de Hurto Agravado contra los que resulten responsables, el Fiscal archiva los actuados bajo la causal de no identificación de los autores del hecho punible, motivo por el cual la parte recurrente interpone requerimiento de elevación de actuados, siendo su fundamentación que “existen suficientes elementos probatorios que vinculan a los que resulten responsables en los hechos investigados”; no obstante, es un argumento en donde no se aprecia una motivación suficiente, sin indicación del agravio, ni del error *in procedendo*, o error *in iudicando*, al haberse inaplicado o interpretado erróneamente dicha norma al caso concreto, por parte del Fiscal a cargo del caso, sin embargo, pese a dichas omisiones advertidas, el despacho provincial, como en la mayoría de veces eleva los actuados al superior, emitiendo disposición de concesorio de elevación, sin hacer mayor análisis respecto a la procedibilidad del mismo, circunstancia que ocurre por la imprecisión de la norma que contiene la figura procesal del requerimiento de elevación o actuados, llamado habitualmente recurso de queja y porque no es considerado un recurso impugnatorio que garantice la pluralidad de instancia.

-En el sexto caso, contenido en la Carpeta Fiscal N° 695-2018, por el delito de Usurpación, la Fiscalía Superior, al igual que en el tercer caso, dispuso declarar nulo el concesorio del requerimiento que fue elevado así como la improcedencia del referido recurso, debido a la inobservancia de

los presupuestos esenciales para su procedencia, tal como se detalló en el caso anterior.

-En los cuatro últimos casos, el motivo del archivo fue también la atipicidad de las conductas denunciadas en los tipos penales por los que estuvieron siendo investigados, verificándose los mismos defectos en los requerimientos de elevación de actuados, carencia de motivación suficiente, imprecisión u omisión de precisar el agravio, no se ha señalado el error *in judicando* o *in procedendo* que consideran se ha cometido al aplicar la norma en el caso concreto, esto es no reúnen los presupuestos de admisibilidad de todo recurso de impugnación, pues al considerar que se trata de un verdadero recurso, entonces no se estaría respetando el principio de Doble Instancia.

En ese sentido, la hipótesis de la presente investigación consistente en que “El requerimiento de elevación de actuados resulta ser garantía de eficacia de la pluralidad de instancia en las Fiscalías Superiores de Lambayeque, 2017-2018, en la medida que se afirme su naturaleza jurídica de recurso impugnatorio”, se valida con el aporte doctrinario y jurisprudencial plasmado en el trabajo de investigación y el análisis de los casos estudiados, en donde se ha podido verificar que resulta necesario establecer unánimemente que en primer lugar el requerimiento de elevación de actuados es un recurso y que en segundo lugar, a fin de cumplir cabalmente con el Principio de Pluralidad de Instancia como

parte del Debido Proceso, debe cumplir con todos los presupuestos de procedibilidad generales para todo recurso y que se encuentran establecidos en el artículo 405, inciso 1 del Código Procesal Penal, en la medida que se corresponda con su finalidad. .

2. Propuesta de *Lege Ferenda*

El presente trabajo de investigación propone una reforma legislativa, en su modalidad de adición de texto a una norma ya prevista, en este caso la siguiente:

Artículo 334° inciso 5 del Código Penal:

“El denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal superior”.

Debe modificarse de la siguiente forma

Artículo 334° inciso 5 del Código Penal:

“El denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal superior”

El requerimiento de elevación de actuados debe reunir los establecidos en el artículo 405, inciso 1 del presente Código, en lo que corresponda a su naturaleza.

El artículo 405, inciso 1 del Código Procesal Penal, establece los presupuestos generales para la procedencia de los recursos de impugnación, tales como el interés para obrar, su interposición por escrito y bajo el plazo de ley y por último que se precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación, y se expresen los fundamentos, con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. El recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta”.

CONCLUSIONES

- El requerimiento de elevación de actuados resulta ser garantía de eficacia de la pluralidad de instancia en las Fiscalías Superiores de Lambayeque, 2017-2018, en la medida que se afirme su naturaleza jurídica de recurso impugnatorio.
- Se ha definido al Principio de Pluralidad de Instancias como garantía constitucional de todas las partes inmersas en un proceso penal, tiene rango constitucional y su finalidad es velar que todos os que se encuentren inmersos en una litis puedan acceder a que la decisión emitida por el órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior, siempre que se cuente con los mecanismos de recurribilidad pertinentes, plateados dentro de término legal.
- El requerimiento o solicitud de elevación de los actuados al Superior Jerárquico, regulado en el art 334° inc. 5 CPP, es un medio o recurso impugnativo formulado contra la disposición que determina el archivo de una investigación, a fin de que el Fiscal Superior, revise la decisión de primera instancia y en base a ello expida cualquiera de las siguientes decisiones: 1) Declarar fundado el medio impugnatorio y disponer la ampliación de los actos de investigación, y que ella siga con el miso o con otro Fiscal, dependiendo si se demuestra que la denuncia anterior no

fue debidamente investigada; 2) Revocar la decisión de archivo y ordenar la consecución de la formalización de la Inv. Prep. y por último 3) Confirmar el archivamiento de los actuados, siendo que con esto la disposición de archivo queda firme y en calidad de cosa decidida.

- Se ha procedido analizar los requerimientos de elevación de los actuados y las disposiciones emitidas por las Fiscalías Superiores de Lambayeque – sede Chiclayo emitidas respecto a ellas, en el distrito fiscal de Lambayeque durante los años 2017-2018, verificándose que estos carecen de motivación suficiente, adolecen de imprecisión o existe omisión para precisar el agravio generado con la decisión, tampoco se han señalado el error *de hecho o derecho* que consideran se ha cometido al aplicar la normativa al supuesto específico, esto es no reúnen los presupuestos de admisibilidad de todo recurso de impugnación, pues al considerar que se trata de un verdadero recurso, entonces no se estaría respetando el principio de Doble Instancia.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda una reforma legislativa, en el sentido de modificar el tratamiento actual al requerimiento de elevación de actuados, y de este modo cubrir el vacío legal respecto a la exigencia de expresión de fundamentos o agravios para la interposición de dicho medio de impugnación, tal como se ha detallado en el proyecto de ley adjunto en los anexos.

BIBLIOGRAFÍA

- ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Edit. Buenos Aires, 1965.
- CÁCERES JULCA, Roberto E. Los Medios Impugnatorios en el Proceso Penal. Jurista Editores. Lima, 2011.
- CALDERÓN CUADRADO, María Pía. La prueba en el recurso de apelación penal (aplicación jurisprudencial en el proceso abreviado y en el juicio de faltas). Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.
- CLARÍA OLMEDO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo V. Edit. Rubinzal – Culzoni. Buenos Aires, 2009.
- CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Nuevo Proceso Penal. Teoría y Práctica de su implementación. 2da Edición. Palestra Editores. Lima, 2015.
- DE LA OLIVA, Andrés/ ARAGONESES MARTÍNEZ, Sara/ HINOJOSA SEGOVIA, Rafael/ MUERZA ESPARZA, Julio/ TOMÉ GARCÍA, José Antonio. Derecho Procesal Penal. 8va Edición. Edit. Universitaria. Madrid, 2007.

- DOIG DÍAZ, Yolanda. “El recurso de apelación contra sentencias”
En: CUBAS VILLANUEVA, Víctor y otros. El nuevo proceso penal. Estudios fundamentales. Palestra Editores, Lima, 2005.
- DOIG DÍAZ, Yolanda. “El Sistema de recursos en el proceso penal peruano: hacia la generalización de la doble instancia y la instauración de la casación”. En: Anuario de Derecho Penal: la reforma del proceso penal peruano, Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2004.
- FENECH, Miguel. Derecho Procesal Penal Vol. II. 2da Edición. Edit. Labor. Barcelona, 1952.
- FERRAJOLI, Luigi. Los valores de la doble instancia y la nomofilaquía”. Nueva Doctrina Penal. 1996. BIDART CAMPOS, Germán. “Manual de la Constitución Reformada”. Tomo II. Ed. Ediar.
- GUEVARA PARICANA, Julio Antonio. Principios Constitucionales del Proceso Penal. Editorial Grjley. Lima, 2007.
- HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Resoluciones Judiciales y Cosa Juzgada. Primera Edición. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, marzo, 2006.

- HORVITZ LENNON, María Inés – LÓPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo II. Edit. Jurídica de Chile. Diciembre, 2004.
- IBERICO CASTAÑEDA, Luis Fernando. La Impugnación en el Proceso Penal. Análisis Doctrinario y Jurisprudencial. Instituto Pacífico, Lima.
- LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo III. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires, 1963.
- LOUTAYF RANEA. Roberto G. El recurso ordinario de apelación en el proceso civil. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia. Ed. Astrea. 1989.
- MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. 2º ed. Buenos Aires. Editores del Puerto S.R.L. 1996.
- NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & litigación oral. Idemsa, Lima, 2010.
- ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal Peruano Tomo III. Gaceta Jurídica. Lima – junio, 2016.
- PEÑA CABRERA FRYRE, Alonso Raúl. Los Medios de Impugnación en el nuevo CPP y los principios acusatorios y dispositivo. En Medios Impugnatorios. Problemas de Aplicación

del Código Procesal Penal de 2004. Edit. Gaceta Jurídica. Lima, junio de 2011.

- SÁNCHEZ PALACIOS PAIVA, Manuel. Causales sustantivas de casación, en Cuadernos Jurisdiccionales. Asociación No Hay Derecho. Ediciones Legales, Lima, abril 2000.
- SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. 2da ed. actualizada y aumentada. Editora Jurídica Grijley. Lima, 2003.
- SAN MARTÍN, César. “Derecho Procesal Penal” Volumen I. Editorial Grijley. 1ra Reimpresión Julio 1999.
- SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. Recurso de Apelación y de Casación Penal. En Teoría de la Impugnación. Palestra Editores. Lima, 2009.
- SEVILLA GALVEZ, Guillermo. Medios Impugnatorios en el Proceso Penal en la Jurisprudencia del TC. Edit. Gaceta Jurídica. Lima, febrero de 2017.
- RUBIANES, Carlos J. Manual de Derecho Procesal Penal. El Procedimiento Penal Tomo III. Edit. De Palma. Buenos Aires, 1985.
- TALAVERA ELGUERA, Pablo. Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal, Editorial Grijley. Lima.

- VARGAS ISLA, Roger Renato. La Condena del Absuelto y el Derecho del Condenado a un Recurso Amplio e Integral. Edit. Rodhas. Lima, setiembre de 2015.
- VÁSQUEZ ROSI, Jorge Eduardo. Derecho Procesal Penal Tomo II. Rubinzal Culzoni Editores. Buenos Aires – Argentina, 1997.

ANEXO: Proyecto de Ley

Proy. de Ley N°.....

Ley que modifica el artículo 334, inciso 5 del Código Procesal Penal, adicionando texto normativo, para que el requerimiento de elevación de actuados debe reunir los establecidos en el artículo 405, inciso 1 del mencionado Código, respecto a los medios de impugnación.

.....con DNI que suscribe, en representación de, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el art. 2, incs 17; 37 y 107 de la CPP y conforme lo establecen los arts 74 y 75 y 76, inc. 3 del Reg. del Congreso de la República, presenta el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Congreso de la Republica ha dado la ley siguiente:

**LEY QUE MODIFICA EL
ARTÍCULO 334, INCISO 5 DEL
CÓDIGO PROCESAL PENAL,
ADICIONANDO TEXTO
NORMATIVO, PARA QUE EL
REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN
DE ACTUADOS DEBE REUNIR LOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO
405, INCISO 1 DEL MENCIONADO
CÓDIGO, RESPECTO A LOS
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.**

ARTÍCULO 1° Modificación del artículo 334°, inciso 5 del Código Penal. –

Modifícase el artículo 334, inciso 5° del Código Penal, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 334, inciso 5° del Código Penal

“El denunciante o el agraviado que no estuviere conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal superior”

El requerimiento de elevación de actuados debe reunir los establecidos en el artículo 405, inciso 1 del presente Código, en lo que corresponda a su naturaleza.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Artículo 1.- Derogación de normas opuestas a la ley

Quedan derogadas y sin efecto las normas legal y administrativas que se opongan o limiten la aplicación a la presente ley.

Artículo 2.- Vigencia de la Ley

La presente ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario “El Peruano”.

Lima,.....de 2019.

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El presente proyecto tiene como objetivo modificar el artículo 334°, inciso 5 del Código Procesal Penal, adicionando texto normativo, para que el requerimiento de elevación de actuados debe reunir los establecidos en el artículo 405, inciso 1 del mencionado Código, respecto a los medios de impugnación.
2. La facultad que tiene la parte denunciante o agraviada de acudir al Fiscal Superior a fin de lograr la revisión de la decisión de archivo emitida por el

Fiscal Provincial, pues sobre ello, el NCPP no establece cuál es la naturaleza de este medio *¿Si se está o no ante un recurso impugnatorio?*, *¿Cuáles son los requisitos para su interposición?*; permitiendo que los recurrentes presenten escritos sin fundamentar en que se basa su desacuerdo con la decisión de archivo, buscando simplemente que el Fiscal Superior haga una revisión total de todos los actuados; lo cual, implica a su vez, que el Fiscal Superior tenga un amplio margen de resolución; esto ocasiona serios problemas, en primer lugar, genera una sobrecarga del sistema fiscal, pues al no existir parámetros o requisitos que se exijan para la presentación del recurso de queja o solicitud de elevación, obliga a que los Fiscales admitan a trámite todos los escritos que se presentes; en segundo lugar, conlleva a una incertidumbre para el imputado, dado que no tiene claro dentro de que márgenes va a decidir el Fiscal Superior, es decir, existe incertidumbre jurídica; y por último, en tercer lugar, toda esta situación genera la vulneración del principio de *tantum devolutum quantum appellatum*, el cual se basa en que sólo se conoce en apelación lo que se apela, esto quiere decir que, en virtud de tal principio, lo no impugnado se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial para el apelante.

5. Por tanto, resulta necesaria la adición de texto normativo al art. 334º inciso 5 del Código Procesal Penal, ya que con la actual regulación de la solicitud de elevación de los actuados, al no existir parámetros se admite a trámite

cualquier pedido de revisión, generando una sobrecarga innecesaria del sistema de justicia, lo cual trae dificultades en la administración, pues los Fiscales se tienen que dedicar a resolver estos pedidos genéricos, en vez de utilizar sus recursos para los casos de mayor envergadura.

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La propuesta legislativa no alterará el marco constitucional ni la legislación vigente, sin embargo, lo que se prosigue con esta iniciativa legislativa es modificar el artículo 334°, inciso 5 del Código Procesal Penal, adicionando texto normativo, para que el requerimiento de elevación de actuados debe reunir los establecidos en el artículo 405, inciso 1 del mencionado Código, respecto a los medios de impugnación.

III. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

El proyecto de ley propuesto no irroga gasto al erario nacional, pues no existe inversión que se tenga que hacer que genere gastos al fisco, pues es aplicable a las relaciones de derecho público lo que permite que exista una regulación frente a la necesidad de establecer unánimemente que en primer lugar el requerimiento de elevación de actuados es un recurso y que en segundo lugar, a fin de cumplir cabalmente con el Principio de Pluralidad de Instancia como parte del Debido

Proceso, debe cumplir con todos los presupuestos de procedibilidad generales para todo recurso y que se encuentran establecidos en el artículo 405, inciso 1 del Código Procesal Penal, en la medida que se corresponda con su finalidad.